

III. La restauración conservadora, 1930-1943

EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1930, el general José Félix Uriburu asumió como presidente provisional y el 20 de febrero de 1932 transfirió el mando al general Agustín P. Justo, que había sido electo, junto con el doctor Julio A. Roca, en noviembre del año anterior. En el ínterin, el gobierno provisional había realizado una elección de gobernador en la provincia de Buenos Aires, el 5 de abril de 1931, en la que triunfó el candidato radical Honorio Pueyrredón, y que fue anulada. El episodio muestra la incertidumbre en que se debatió el gobierno provisional, vacilante entre la “regeneración nacional” o la restauración constitucional.

REGENERACIÓN NACIONAL O RESTAURACIÓN CONSTITUCIONAL

La incertidumbre era común a todos los sectores que habían concurrido a derribar el gobierno de Yrigoyen y a interrumpir la continuidad institucional. Ciertamente coincidían en este primer objetivo, y se solidarizaban con el gobierno cuando perseguía a los dirigentes radicales, dejaba cesantes a los empleados públicos nombrados por el gobierno derribado o investigaba fantasiosas corrupciones. La mayoría también apoyaba la política de mano dura

adoptada con el movimiento social: la intervención en los puertos para desarmar allí el control sindical, las deportaciones de dirigentes anarquistas o comunistas -perseguidos por la nueva Sección Especial de la Policía-, y hasta el fusilamiento del “anarquista expropiador” Severino di Giovanni. Pero en rigor -y a diferencia de 1919-, en 1930 la movilización social era escasa, la Depresión paralizaba la contestación, y las direcciones sindicales, escasamente identificadas con la institucionalidad democrática, habían hecho poco para defenderla. Éste no había sido el objetivo desencadenante de la revolución, como tampoco lo fue la crisis económica mundial, ausente del debate y cuyas vastas consecuencias parecían no advertirse todavía. Para sus protagonistas, la revolución se había hecho contra los vicios atribuidos a la democracia, pero una vez depuesto Yrigoyen, no había acuerdo sobre qué hacer, y las clases propietarias, así como el Ejército, que de forma paulatina se iba constituyendo en un nuevo actor político, vacilaban entre diversas propuestas.

La más vocinglera era la de los nacionalistas, que rápidamente tomaron la iniciativa. Su voz había sido muy eficaz como ariete contra el radicalismo, por el talento polémico de sus voceros, por su capacidad para articular discursos diversos, que apelaban a distintas sensibilidades, así como para expresar y legitimar lo que para otros era inconfesable: un elitismo autoritario del que se enorgullecían. También los fortalecía el suceso que en todo el mundo estaban teniendo este tipo de propuestas, que inspiraban tanto a regímenes autoritarios muy tradicionales cuanto a novísimas y por entonces exitosas experiencias, como la de Benito Mussolini en Italia. Finalmente, podían contar con algún respaldo, limitado pero importante, del poder. En el gabinete de Uriburu, compuesto por conservadores de viejo estilo, los apoyaba el ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, un conservador tradicional como

Uriburu, que simpatizaba con estas nuevas formas de autoritarismo; también lo hacían algunos oficiales del entorno presidencial y otros altos funcionarios, como el interventor en Córdoba, el escritor y ensayista Carlos Ibarguren, uno de los iniciadores de la rehabilitación de Juan Manuel de Rosas. Los militantes nacionalistas, en cambio, sólo ocuparon algunos cargos de menor importancia en distintos gobiernos provinciales.

Uriburu hizo todo lo posible por apoyarlos. Habló en distintos foros, principalmente militares, abominando de la democracia, reclamando una reforma institucional de fondo y predicando las ventajas del corporativismo y la representación funcional. Pero su poder y su habilidad política eran escasos. Paradójicamente, jugó todas sus cartas a una elección, confiando en un triunfo plebiscitario en Buenos Aires, y la derrota del 5 de abril prácticamente lo convirtió en un cadáver político. Fracasada su apelación a la sociedad, intentó sin embargo una segunda baza con el Ejército, al que quiso movilizar mediante la Legión Cívica, una escuadra civil organizada por oficiales, que debía ser la vanguardia de la revolución anunciada pero que no pudo superar la intrascendencia.

Los nacionalistas eran mucho más eficaces para golpear que para construir, y esta participación marginal en el poder más los estorbaba que los beneficiaba. Progresivamente se fueron distanciando del gobierno, a medida que crecía la influencia de quienes rodeaban a Justo y la alternativa institucional, a la cual sin embargo terminaron apoyando. Por entonces habían acabado de conformar su discurso, que pronto emplearon tanto para combatir la solución triunfante como para apelar, con energía creciente, al Ejército. Los temas tradicionales contra la democracia se habían integrado con un vigoroso anticomunismo y un ataque al liberalismo, fuente primigenia de los males denunciados. En una

operación muy típica de la época, redujeron todos sus enemigos a uno: las altas finanzas y la explotación internacional se fundían con los comunistas, los extranjeros causantes de la disgregación nacional, y también los judíos, unidos en una siniestra confabulación. Reclamaban por la vuelta a una sociedad jerárquica, como la colonial, no contaminada por el liberalismo, organizada por un Estado corporativo y cimentada por un catolicismo integral. Si mucho de esto podía identificarse con el fascismo, carecían de la vocación y capacidad plebiscitaria de aquél; más bien, reclamaban la constitución de una nueva minoría dirigente, nacional y no enajenada al extranjero, que confiaban encontrar entre los militares. Fracasada la alternativa de Uriburu, el Ejército se convirtió en su objetivo principal.

Mientras los nacionalistas proponían un camino reaccionario pero novedoso, el grueso de la clase política optaba por la defensa de las instituciones constitucionales, pero señalando que éstas no habían estado nunca supeditadas a las formas más crudas de la democracia. Por el contrario, existía en el pasado una amplia experiencia acerca de cómo resolver la cuestión electoral y formas, no necesariamente groseras, de mediatizar la voluntad popular. Esta alternativa, que salvaba los principios del liberalismo, fue reclamada desde la sociedad, fue defendida vigorosamente por los principales órganos de opinión, como *La Nación o Crítica*, y fue asumida por los partidos políticos que habían constituido la oposición a Yrigoyen. Mientras los socialistas y los demoprogresistas pasaron de nuevo a la oposición, los partidos que en 1928 habían apoyado la candidatura de Leopoldo Meló oscilaron entre enfrenar los proyectos autoritarios y corporativistas de Uriburu y utilizar para una eventual elección el apoyo del gobierno, sin duda indispensable para derrotar a los radicales. Las diferencias tácticas los dividieron profundamente. El primer grupo que se constituyó, la Federación

Nacional Democrática, definitivamente liberal y enérgicamente opuesto a Uriburu, fue fracturado por el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, menos hostil a la política presidencial; pero su derrota el 5 de abril -que clausuró a la vez los proyectos de regeneración y la ilusión de vencer a los radicales en elecciones limpias- creó las condiciones para un reagrupamiento de las fuerzas, en torno de la ya perfilada candidatura del general Justo. El sector más consistente de la coalición eran los grupos conservadores, que constituyeron el Partido Demócrata Nacional, una coalición heterogénea de partidos provinciales que incluía desde los más tradicionales de Buenos Aires hasta los más liberales de Córdoba o Mendoza. El radicalismo antipersonalista, su competidor en el frente en formación, se había desgranado luego de que muchos retornaran al viejo tronco, dirigido ahora por Alvear. El Partido Socialista Independiente sólo podía ofrecer una base sólida en la Capital, y también un grupo calificado de dirigentes. Este conglomerado se unió tras la figura del general Justo, pero sin superar sus diferencias, al punto de que lo apoyaron con dos candidatos a vicepresidente distintos.

Justo -pieza central en esta alianza- podía presentarse como un militar con vocación civil, pero sobre todo como quien contaba con el respaldo del Ejército. Desde el 6 de septiembre libró una guerra sorda con Uriburu por el control de los mandos principales, y salió triunfante. Su más fiel sostén, el coronel Manuel A. Rodríguez, no sólo mandaba Campo de Mayo, sino que fue electo presidente del Círculo Militar, lo que atestiguaba el estado de ánimo predominante en la institución. Los oficiales eran reclamados por diferentes grupos de activistas: los radicales, embarcados en conspiraciones, los nacionalistas, igualmente activos, y los adeptos a Justo, que unían las banderas del constitucionalismo con las del profesionalismo; pero en el grueso de ellos predominaba todavía la

desconfianza hacia la política y una postura básicamente profesional, que inclinó la balanza en favor de Justo.

La mayor dificultad estaba en los radicales, que habían resurgido como el ave Fénix luego de la victoria de abril de 1931 y del retorno de Marcelo T. de Alvear, quien, con la bendición de Yrigoyen, reunificó el partido. Tampoco entre los radicales estaban claras las opciones, pues muchos apostaban a la carta electoral y otros a derribar al gobierno provisional, con un movimiento cívico-militar. Los numerosos oficiales radicales conspiraron, y el gobierno utilizó las conspiraciones para desarmar a su más temible opositor político. En julio de 1931, estalló en Corrientes una revolución, encabezada por el coronel Pomar, que fue rápidamente sofocada permitiendo al gobierno detener o deportar a la plana mayor del partido. Pese a ello, la Convención proclamó la candidatura presidencial de Alvear, que el gobierno vetó aduciendo de modo especioso a la vez razones constitucionales y de seguridad. Los radicales volvieron entonces a su antigua táctica de la abstención, sin abandonar los intentos de conspiración, y dejaron el campo libre a la candidatura de Justo, que incluso pudo presentarse como un término medio entre la dictadura de Uriburu y el extremismo subversivo de Alvear.

En la elección de noviembre de 1931, sólo lo enfrentó una coalición del Partido Socialista y el Demócrata Progresista, que proponían a dos prestigiosos dirigentes: Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Aunque eventualmente podía capitalizar la oposición al gobierno, tenía la debilidad de la escasa organización partidaria fuera de la Capital y de Santa Fe, así como el conocido antirradicalismo de sus candidatos. En noviembre de 1931, y en una elección no totalmente escandalosa, la fórmula encabezada por Justo obtuvo un triunfo que tampoco fue aplastante y permitió que la oposición ganara el gobierno de una provincia y una respetable representación parlamentaria.

Las formas institucionales estaban salvadas y la revolución parecía haber encontrado un puerto seguro. En el Congreso hubo un oficialismo y una oposición, que se desempeñó prolijamente y fue reconocida como tal, quizá porque unos y otros sabían que no competían realmente por el poder. La abstención radical pesaría luego, pero por el momento constituía una ventaja, pese al llamado de atención que pudo significar el multitudinario acompañamiento popular al funeral de Hipólito Yrigoyen, muerto en julio de 1933.

Organizar el oficialismo no fue una tarea sencilla. Justo procuró equilibrar la participación de las distintas fuerzas en su gobierno, aunque fue notoria su reticencia hacia los partidos conservadores, que sin embargo constituían su más sólida base. Sólo uno de sus ministros -el de Obras Públicas, Alvarado- provenía de esas filas, aunque otros dos -el canciller Carlos Saavedra Lamas y el ministro de Hacienda, Horacio Hueyo- de alguna manera pertenecían a ese tronco. Los antipersonalistas tuvieron dos ministerios -Leopoldo Meló en Interior y el santafesino Simón de Iriondo en Educación y Justicia- y los socialistas independientes, uno: Antonio de Tomaso, uno de los políticos más respetados por Justo, y el único de origen plebeyo, fue ministro de Agricultura.

Pese a que el Partido Socialista Independiente pronto declinó electoralmente y se disolvió, sus dirigentes, y en particular De Tomaso y Federico Pinedo, cumplieron un papel fundamental en la estructuración de la alianza y en la formación de lo que se llamó la Concordancia parlamentaria, así como en el diseño de las principales políticas del gobierno. Los partidos oficialistas ganaron las elecciones utilizando técnicas muy conocidas, sobre las que había una vasta experiencia acumulada, que combinaban el apoyo de la autoridad -en particular, los comisarios- con el sistema del caudillismo, y explotaban las múltiples colusiones entre ambos. Mientras los radicales mantuvieron su abstención, la aplicación de

estos mecanismos sirvió principalmente para dirimir los conflictos en el seno del oficialismo, pero desde 1935 se usó para bloquear el camino al partido conducido por Alvear. La ciudad de Buenos Aires -más expuesta a la opinión pública- se vio libre de ellos, y siempre ganó allí la oposición; en la provincia de Buenos Aires, en cambio, se practicaron las formas más groseras del fraude, que un gobernador, Manuel A. Fresco, calificó de patriótico, diciendo lo que seguramente muchos pensaban. Quizá sea significativa la estigmatización por la sociedad de estas prácticas, en el fondo muy tradicionales, que revela hasta qué punto la cultura democrática había empezado a arraigar en la sociedad.

INTERVENCIÓN Y CIERRE ECONÓMICO

La eficacia del gobierno debía quedar demostrada, ante la sociedad en general y en particular ante las clases propietarias, por su capacidad para enfrentar la difícil situación económica. La Depresión, que se venía manifestando desde 1928, persistió hasta 1932, golpeando duramente a lo que -pese a los cambios de la década anterior- era hasta entonces una economía abierta. Cesó el flujo de capitales, que tradicionalmente la había alimentado, y muchos incluso retornaron a sus lugares de origen. Los precios internacionales de los productos agrícolas cayeron fuertemente -mucho más aún que en la crisis de 1919-1922- y, aunque el volumen de las exportaciones no descendió, los ingresos del sector agrario y de la economía toda se contrajeron mucho. Como el gobierno optó por mantener el servicio de la deuda externa, mucho más gravosa por la disminución de los recursos corrientes, debieron reducirse en forma drástica tanto las importaciones como los gastos del Estado, cuyo déficit pasó a convertirse en un problema grave.

Por otra parte, el dislocamiento de la economía internacional, ya

anunciado en la década anterior, era cada vez mayor. En la crisis, los países centrales utilizaron su poder de compra para defender sus mercados, asegurar el pago de las deudas y proteger las inversiones. Gran Bretaña se refugió en el proteccionismo comercial y constituyó un “área” de la libra, defendida por el control de cambios, primero, y por la inconvertibilidad de la moneda, después. Idéntico camino tomaron Alemania y Francia, y por último Estados Unidos, que en 1933 declaró la inconvertibilidad del dólar. Era un mundo distinto, que requería una política económica nueva e imaginativa. La adoptada inicialmente -por Uriburu y por Justo al principio de su gobierno- se había limitado a las medidas reactivas clásicas, y sólo incursionó tímidamente por nuevos caminos; a mediados de 1933, con la designación de Pinedo como ministro de Hacienda-con quien colaboró Raúl Prebisch-, se avanzó por un rumbo más novedoso, delineándose dos tendencias que habrían de perdurar largamente: la creciente intervención del Estado y el cierre progresivo de la economía. También otra, menos duradera pero de mayor trascendencia en lo inmediato: el reforzamiento de la relación con Gran Bretaña.

A fines de 1931 -poco antes de que Justo sucediera a Uriburu- se estableció el impuesto a los réditos, según un antiguo proyecto de Yrigoyen, sistemáticamente vetado hasta entonces, pero que en el nuevo clima de la crisis -y en manos de un gobierno confiable- fúe aceptado sin discusión por los sectores propietarios. Las finanzas públicas dejaron de depender exclusivamente de los impuestos a las importaciones o de préstamos externos. Sumado a la drástica reducción inicial de gastos, hacia 1933 el gobierno había logrado equilibrar su presupuesto.

También de 1931 fúe el establecimiento del control de cambios, mediante el cual el gobierno centralizaba la compra y venta de divisas. En principio fúe una medida para enfrentar la crisis y

asegurar la disponibilidad para el pago de la deuda externa, pero pronto se vio que constituía un poderoso instrumento de política económica: desde el gobierno podían establecerse prioridades para el uso de divisas, y esto era una cuestión que preocupaba no sólo a los distintos sectores internos, sino, particularmente, a los dos grandes aspirantes externos a disponer de ellas: Gran Bretaña y Estados Unidos. En noviembre de 1933, una sustancial reforma estableció dos mercados de cambio; uno, regulado por el Estado, administraba las divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias tradicionales, mientras que en el otro se compraban y vendían libremente las originadas en préstamos recibidos o en exportaciones no tradicionales, como las industriales. Para el primero, la devaluación fue mínima, aunque se estableció una diferencia del 20% entre el precio de compra y el de venta. El Estado se hizo de una importante masa de recursos, y sobre todo pudo decidir sobre su uso. Así estableció una serie de prioridades para vender las divisas que controlaba: el servicio de la deuda externa era la primera; luego, atender las importaciones esenciales, y en tercer término, las remesas de las empresas de servicios públicos, como las ferroviarias. En el segundo mercado se negociaban las escasas divisas restantes, tanto para la importación de bienes de consumo como para atender al equipamiento de las empresas.

Avanzando sobre el control de las finanzas, en 1935 se creó el Banco Central, cuya función principal era regular las fluctuaciones cíclicas de la masa monetaria, evitando tanto una excesiva holgura como la escasez, así como controlar la actividad de los bancos privados -que participaban de su Directorio-, sobre todo en el manejo de sus créditos. El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias asumió la liquidación ordenada de los bancos golpeados por la crisis. También para atenuar los efectos de las crisis cíclicas y defender a los productores locales, se comenzó a regular la

comercialización de la producción agropecuaria. Utilizando los fondos provenientes del control de cambios, la Junta Nacional de Granos aseguró un precio mínimo para los productores rurales, evitándoles tener que vender en el peor momento. La Junta Nacional de Carnes apuntó al mismo objetivo, aunque limitada al escaso sector del mercado que escapaba a los frigoríficos extranjeros. El sistema se extendió también a productos extrapampeanos, como el algodón y el vino.

Por ese camino, el Estado fue asumiendo funciones mayores en la actividad económica, y pasó de la simple regulación de la crisis a la definición de reglas de juego cada vez más amplias, según un modelo que teorizó el economista británico John Maynard Keynes y que empezaba a aplicarse en todo el mundo. A la vez, el conjunto de la economía fue cerrándose en forma progresiva a un mundo donde también se dibujaban, con nitidez creciente, áreas relativamente cerradas. Era todavía una tendencia incipiente, impulsada por factores coyunturales, pero que se fue afirmando progresivamente, y estimuló modificaciones que finalmente la harían irreversible.

La más importante tuvo que ver con la industria, cuya producción comenzó a crecer en el marco de la crisis, y siguió haciéndolo luego de la recuperación de la segunda mitad de la década. Con la prosperidad de las décadas anteriores se había constituido en el país un mercado consumidor de importancia. El cierre creciente de la economía, los aranceles y la escasez de divisas creaban condiciones adecuadas para sustituir los bienes importados por otros producidos localmente, sobre todo si la producción no exigía una instalación fabril muy compleja o si ya existía una base industrial que podía ser utilizada con mayor intensidad. Ésta se había extendido en la década de 1920 y siguió expandiéndose, sobre las mismas líneas, luego de 1930. Creció mucho el sector textil, pero también la mayoría de las actividades volcadas al consumo:

alimentos, confecciones y productos químicos y metálicos diversos. Los grandes capitales, vinculados hasta entonces en forma predominante a las actividades agropecuarias para la exportación, acentuaron su orientación hacia la industria. El más importante grupo exportador, Bunge y Born, que ya tenía otras industrias, instaló en 1932 la empresa textil Grafa, precisamente en la rama por entonces más dinámica. Lo mismo hicieron otros grupos económicos tradicionales, como Leng Roberts o Tornquist -que combinaban actividades agropecuarias con otras, industriales o financieras-, y también nuevos inversores extranjeros: significativamente, a mediados de la década de 1930, se instalaron tres grandes empresas textiles estadounidenses, Anderson Clayton, Jantzen y Sudamtex, y en seguida Ducilo, dedicada al hilado sintético.

La sustitución de importaciones ofrecía el atractivo de un mercado existente y cautivo, y una ganancia rápida. Una vez satisfecho, era más conveniente pasar a otra rama, igualmente insatisfecha, antes que profundizar la inversión en la anterior. A esto concurrieron factores de distinto tipo. Como mostraron Jorge Sábato y Jorge Schvarzer, la vieja dinámica de los sectores propietarios, de diversificación en distintas actividades sin atarse definitivamente a una, encontró en la industrialización sustitutiva un nuevo campo, que se complementó posteriormente con la inversión inmobiliaria. Por otra parte, la combinación de un mercado cerrado y algunas pocas grandes empresas por cada rama o actividad tornó poco relevante la presión por la mayor eficiencia o el menor precio. Lo eran, en cambio, las reglas de juego que ponía el Estado, ya fuera por la vía de los aranceles o del tipo de cambio. Así, el crecimiento industrial abrió un nuevo campo de negociación entre los sectores propietarios y el Estado.

Los cambios en el sector agropecuario fueron menos notables,

sobre todo en la región pampeana. La ganadería siguió retrocediendo respecto de la agricultura, al igual que en la década anterior. La producción agrícola no decayó, pese al derrumbe de los precios, aunque la situación de los productores se deterioró sensiblemente, en especial la de los más pequeños, y se fueron delineando las condiciones del éxodo rural, visible luego del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, las exportaciones de maíz crecieron mucho en los años centrales de la década -aprovechando un período de sequía en Estados Unidos-, lo que influyó tanto en el equilibrio fiscal como en la relativa prosperidad de la economía entre 1934 y 1937, al punto de que sus efectos se manifestaron en el estímulo a la industria y la construcción. El cambio más importante se produjo fuera del área pampeana, donde crecieron algunos cultivos industriales orientados al mercado interno, y muy en especial el del algodón, que desde 1930 se consumía casi íntegramente en el país. En todo el nordeste se extendió la ocupación de nuevas tierras, iniciada en la década anterior, y se constituyó un amplio sector de pequeños productores dependientes de un sector comercial e industrializador muy concentrado. También aquí el Estado intervino para regular la comercialización.

En suma, la crisis y las respuestas de índole coyuntural habían creado una serie de condiciones nuevas que hacían muy difícil el retorno a la situación previa. Podía discutirse si el equilibrio y la relativa prosperidad que se advertía hacia 1936 -y que se manifestaba en una reactivación de la protesta sindical- debía atribuirse a esos cambios o simplemente -como ha planteado Arturo O'Connell- a una transitoria prosperidad de las exportaciones. Pero el cierre de la economía, la intervención del Estado y un cierto crecimiento industrial parecían datos sobre los que no se podía retornar.

LA PRESENCIA BRITÁNICA

Estos cambios se fueron produciendo gradualmente, sin suscitar grandes discusiones ni polarizaciones. En cambio, la cuestión de la relación con Gran Bretaña -que se venía debatiendo desde la década anterior- resultó mucho más controvertida. Presionada por el avance de Estados Unidos, y en el marco de la crisis desatada en 1930, Gran Bretaña optó por reconcentrarse en su imperio, fortalecer sus vínculos con las colonias y dominios y acotar en ellos la presencia estadounidense. A la vez, en un contexto mundial de restricciones financieras, se propuso defender sus antiguos mercados y salvar sus ingresos provenientes de préstamos o inversiones antiguas. No todos los objetivos eran compatibles, de modo que al establecerse las prioridades había un margen considerable para la negociación. En 1932, la Conferencia Imperial de Ottawa inclinó la balanza hacia los miembros de la Commonwealth, quienes tendrían preferencia en las importaciones británicas. Entre otras medidas, se decidió reducir en un tercio las compras de carne congelada argentina, que podía reemplazarse por la de Australia, y el 10% la enfriada, tomando para esto como base las compras de 1932, ya muy bajas. Se trataba de un punto en extremo sensible para la Argentina, quizá no tanto por su importancia económica intrínseca como por la magnitud de los intereses constituidos en torno de la exportación de carne: productores, frigoríficos y empresas navieras eran capaces de presionar fuertemente sobre el gobierno. A la vez, el gobierno argentino poseía un arma también decisiva: la política arancelaria y el control de cambios permitían discriminar las importaciones y regular el monto de las divisas que sería utilizado para pagar el servicio de la deuda británica, para seguir comprando sus productos

o para remitir las utilidades de sus empresas instaladas en la Argentina. En un contexto de escasez de divisas, y con fuertes demandas de los intereses comerciales estadounidenses, el punto se convertía en sumamente importante para Gran Bretaña.

En 1933, una misión encabezada por el vicepresidente Julio A. Roca negoció en Londres las condiciones para el mantenimiento de la cuota argentina de carne. Ello era vital para asegurar la credibilidad del gobierno entre los diversos sectores ligados a la actividad pecuaria, y en este aspecto obtuvo un éxito relativo: se mantendrían las condiciones de 1932, y se consultarían eventuales reducciones posteriores que fueran necesarias. No logró gran cosa en su segundo objetivo: aumentar la participación de los productores locales en el control de las exportaciones, de modo de negociar en mejores términos con los frigoríficos. El tratado, firmado por Roca y el ministro británico Runciman, limitó al 15% el cupo que podría ser manejado por frigoríficos nacionales, entre los cuales se preveía que podría existir uno de tipo cooperativo, sin fines de lucro. A cambio de eso, Gran Bretaña se aseguró de que la totalidad de las libras generadas por este comercio se emplearían en la propia Gran Bretaña: en el pago de la deuda, en la importación de carbón, material ferroviario o textiles -para los que se establecía un tratamiento arancelario preferencial-, y en la remisión de utilidades de empresas británicas. A la vez, se estipulaba un “tratamiento benévolo” para esas empresas, que estaban sometidas a múltiples dificultades. Se trataba sin duda de una gran victoria para los británicos: a cambio del mantenimiento de la participación argentina en el mercado de carnes -un negocio en el que los empresarios británicos eran el socio principal-, se aseguraban el cobro de los servicios de sus antiguas inversiones y el control de partes significativas de un mercado interno amenazado. Los estadounidenses, por su parte, discriminados con los aranceles y

con el uso de las divisas, retrocedieron en este mercado, aunque luego contraatacaron realizando inversiones industriales que saltaban la barrera arancelaria. La tendencia al bilateralismo con Gran Bretaña, insinuada en 1929 con el Tratado D'Abernon, quedó ampliamente ratificada.

El “tratamiento benévolo” apuntaba a reflotar empresas británicas en dificultades: las ferroviarias y las de transporte urbano. Los ferrocarriles estaban atenazados por gastos fijos muy altos, una reducción general de su actividad y la creciente competencia del transporte automotor, estimulado por la sistemática construcción de caminos iniciada en 1928 y mantenida con vigor por Justo. El camión solía llevarse la parte más apetecible del negocio de carga, y a la vez estimulaba las importaciones de automotores, repuestos y neumáticos de origen estadounidense. El tratado aseguró a las empresas que podrían enviar sus ganancias, pero éstas fueron mínimas a lo largo de toda la década. Algo parecido ocurría con la empresa Anglo de tranvías de Buenos Aires -propietaria también de la primera línea de subterráneos-, víctima de la competencia de los taxis colectivos, más rápidos y eficaces. El “tratamiento preferencial” consistió en la creación de una Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que despertó la indignación general sin lograr su objetivo: que los colectiveros se incorporaran a ella y cesaran con su competencia. En ambos casos, se trataba de empresas que habían dejado de ser rentables y que, por otra parte, no habían hecho las inversiones necesarias para conservar su peso, de modo que el “tratamiento preferencial” sólo buscaba aumentar algunas ventajas monopólicas y dilatar su ineludible deterioro, para el cual los directivos empezaron a trazar una nueva estrategia: venderlas al Estado.

Pese a que los beneficios no eran parejos para todos los involucrados, el tratado de Londres fue apoyado por los diversos

grupos propietarios: cuando se discutió en el Congreso, la oposición más consistente fue la del Partido Socialista, preocupado por las repercusiones que estos arreglos tendrían sobre los consumidores locales. Sin embargo, casi de inmediato afloraron los conflictos entre los distintos intereses: los frigoríficos, los ganaderos “invernadores”, que suministraban la carne para el enfriado y habían conservado casi intacta su cuota en el mercado británico, y el grueso de los “criadores”, que debían optar entre la exportación de carne congelada de menor calidad, la venta a los invernadores o el consumo interno. Los grandes invernadores, más estrechamente vinculados con los frigoríficos, se expresaban a través de la Sociedad Rural; los criadores organizaron la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), vocero de sus intereses sectoriales. En el acalorado debate, no se discutieron tanto los términos del tratado como la forma en que los frigoríficos habrían de manejar los precios internos, las ventajas relativas de unos productores y otros, y la posibilidad de que los productores participaran en su regulación a través de un frigorífico corporativo, utilizando la cuota del 15% que el tratado les reservaba. En 1933 se sancionó la ley que establecía una Junta Nacional de Carnes, destinada a intervenir de manera limitada en la regulación del mercado, y se disputó intensamente por la composición de su directorio. Dos años después se produjo el episodio más espectacular del debate.

En 1935, el senador por Santa Fe Lisandro de la Torre, que ya había manifestado reservas ante el tratado de Londres, solicitó una investigación sobre el comercio de las carnes en el país y las actividades de los frigoríficos. Los senadores oficialistas reconocieron la existencia de abusos importantes por parte de los frigoríficos, de precios excesivamente bajos pagados a los productores, prácticas monopólicas, evasión de impuestos y

reluctancia ante la investigación. De la Torre fue más allá y unió el ataque a los frigoríficos con una embestida muy fuerte contra el gobierno. Propietario rural él mismo, y dirigente de una sociedad rural santafesina, De la Torre había sido candidato presidencial en 1916 contra Yrigoyen y en 1932 contra Justo, y era por entonces la figura destacada de la oposición parlamentaria de socialistas y demoprogresistas. Denunció que los frigoríficos, protegidos por las autoridades, no pagaban impuestos, ocultaban sus ganancias y daban trato preferencial a algunos ganaderos influyentes, como el propio ministro de Agricultura, Luis Duhau, que había sido presidente de la Sociedad Rural. Fue una intervención espectacular, que duró varios días, atrajo a la opinión pública y suscitó una violenta respuesta de los ministros Duhau y Pinedo. En lo más violento de una de las sesiones cayó asesinado el senador electo Enzo Bordabehere, compañero de bancada de De la Torre, a quien iba dirigido el disparo, a manos de un hombre de acción vinculado con Duhau. El debate terminó abruptamente, sin resolución. El gobierno perdió mucho ante la opinión y, sobre todo, comprobó que la etapa más fácil de su gestión había terminado. En los años siguientes, y con vistas a las elecciones presidenciales, la oposición reconstituyó sus filas.

Aunque se apoyaba en los reclamos de un sector de ganaderos, De la Torre había sabido dar una amplitud política mayor a su reclamo, esgrimiendo un argumento capaz de polarizar, contra el “imperialismo” y la “oligarquía”, una opinión sensibilizada por el avance, en cierto modo grosero, de los intereses británicos. La argumentación se reconocía en la tradición socialista y de izquierda -en Manuel Ugarte o en Alfredo Palacios-, pero también en la de otros intelectuales provenientes de las clases tradicionales y movilizados por la crisis. En 1934 los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta -ganaderos entrerrianos y veteranos del nacionalismo

antirradical- publicaron un libro de impacto: *La Argentina y el imperialismo británico*, en el que historiaban una relación que juzgaban perjudicial desde sus comienzos, allá por 1810; responsabilizaban tanto a los británicos como a la clase dirigente local, encandilada por el liberalismo y ciega a los verdaderos intereses nacionales. A ella contraponían la figura de Rosas, expresión de los intereses auténticamente nacionales, y a la vez de una forma de gobierno dictatorial no contaminada por el liberalismo corruptor.

La reivindicación de la figura de Rosas ya había empezado en la década anterior y se desarrolló intensamente en los años treinta, tanto en medios historiográficos como políticos. Servía para identificar a quienes eran movidos por el rechazo de la influencia británica y también a los que veían al liberalismo como el principal enemigo. Allí, confluyeron naturalmente el nacionalismo filofascista y sobre todo las nuevas corrientes del catolicismo, para quienes Rosas representaba no el antiimperialismo, sino la tradición hispana de una sociedad autoritaria, jerárquica y católica, que contraponían a la contemporánea, corrompida por el liberalismo, el protestantismo, el judaísmo y el marxismo. El acercamiento de las clases dirigentes y la Iglesia católica -manifiesto en las grandes jornadas del Congreso Eucarístico de 1934- creó el espacio para la expansión de estas ideas, que empezaban a revertir el tradicional liberalismo de la sociedad argentina.

UN FRENTE POPULAR FRUSTRADO

Pese a sus éxitos en lo económico, el régimen presidido por Justo fue visto -con intensidad creciente- como ilegítimo: fraudulento, corrupto y ajeno a los intereses nacionales. Si hasta 1935 el gobierno había avanzado sin grandes contratiempos, desde esa fecha se

hicieron evidentes los signos de una creciente movilización social y política.

En julio, el prestigioso general Ramón Molina había elogiado en forma pública la presidencia de Alvear, y poco después hizo un reclamo por la vigencia de la soberanía popular y de elecciones libres, que recibió el entusiasta apoyo de la Federación Universitaria. Cuando en 1937 fue pasado a retiro, hubo una importante manifestación de apoyo, en la que hablaron Alfredo Palacios y el propio Alvear.

En octubre de 1935, los trabajadores de la construcción de Buenos Aires, conducidos por dirigentes comunistas, iniciaron una huelga que duró más de noventa días; en los barrios de la ciudad se manifestó una amplia solidaridad y en enero la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una huelga general de dos días -la única de la década- al cabo de la cual los huelguistas obtuvieron la satisfacción de una parte sustancial de sus demandas. El saldo más importante fúe, quizá, la constitución de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, uno de los sindicatos más importantes y combativos del país. En 1936 se efectuaron muchas huelgas, al igual que en 1935 y 1937, coincidiendo probablemente con la reactivación económica. En ese año, la CGT, cuya dirección se había reconstituido con predominio de socialistas y comunistas, celebró el 1º de Mayo con un acto conjunto de los distintos partidos de oposición; radicales, demoprogresistas, socialistas y comunistas adhirieron a los reclamos de los trabajadores, fustigaron a los “herederos del 6 de septiembre” y reclamaron por la libertad y la democracia. Por primera vez en esa fecha, se cantó el Himno Nacional, y Marcelo T. de Alvear fue elogiado como “un obrero auténtico de la democracia nacional”.

En 1936, la Unión Cívica Radical (UCR), que el año anterior había levantado la abstención electoral, triunfó en las elecciones de

diputados en algunos de los principales distritos -Capital, Santa Fe, Mendoza, Córdoba- y alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados; en Córdoba, además, triunfó su candidato a gobernador, Amadeo Sabattini. Quizá para compensar, el gobierno intervino la provincia de Santa Fe, gobernada por el demoprogresista Luciano Molinas, y avaló el desembozado fraude con el que Manuel Fresco ganó en la provincia de Buenos Aires. Un “manifiesto de las derechas”, que redactó Pinedo, alertó contra el resurgimiento de las “masas ciegas” y la turbia democracia, desplazada en 1930, y justificó el “fraude patriótico”, que desde entonces el gobierno utilizó sistemáticamente en favor de los partidos oficialistas, con la única excepción de la Capital.

La reacción del gobierno se dirigió también hacia el nuevo sindicalismo combativo: la ley de residencia fue aplicada en 1937 contra los principales dirigentes de la construcción, comunistas de origen italiano deportados a la Italia fascista. A la vez, se aprobó en el Senado una ley de represión del comunismo, que fue bloqueada por los diputados. Para equilibrar el aglutinamiento de las fuerzas que reclamaban por la democracia, Justo abrió un poco el juego a los sectores nacionalistas que hasta entonces había relegado: así, el gobernador Fresco pudo hacer fe pública de militancia fascista y los oficiales nacionalistas, entusiasmados con los nuevos éxitos del Tercer Reich, pudieron hacer campaña con libertad entre los cuadros del Ejército. Se decía que el coronel Juan Bautista Molina, acólito de Uriburu en la creación de la Legión Cívica, conspiraba contra Justo, quien sin embargo lo promovió a general.

Las derechas habían convocado a un “frente nacional”, contra el Frente Popular que se esbozaba. Las denominaciones no eran caprichosas, pues los nuevos alineamientos y polarizaciones que se estaban dando en el mundo influían en los conflictos locales, alertaban fuerzas adormecidas, suministraban consignas y banderas,

definían a los indecisos y ayudaban a delinear potenciales alianzas.

En el campo de los opositores al gobierno fue muy importante el cambio de posición del Partido Comunista, que en marzo de 1935, adoptando rápidamente las nuevas orientaciones del Comintern, había abrazado la consigna del Frente Popular. En los años anteriores, con la consigna de “lucha de clase contra clase”, los comunistas habían combatido por igual a los nazis y fascistas y a los partidos socialdemócratas, a quienes estigmatizaban como los más peligrosos enemigos del proletariado, pero desde 1935 se lanzaron a impulsar la unidad de los “sectores democráticos” para enfrentar el nazifascismo, sacrificando las consignas y prácticas que pudieran irritar o atemorizar a los grupos progresistas y democráticos de la burguesía. Con tal programa, en Francia y en España integraron, junto con socialistas y partidos radicales de centro, sendos frentes populares que ganaron las elecciones de 1936. Aunque la situación local no era exactamente igual, el gobierno de la Concordancia fue identificado con el enemigo universal, y el reclamo de un frente popular y democrático sirvió para cerrar filas entre sus opositores.

Luego, la Guerra Civil española, cuyo impacto en la Argentina fue enorme, sirvió para definir más claramente aún los campos. No sólo se dividió la extensísima colectividad de españoles, sino la sociedad argentina toda, y proliferaron colectas, comités de ayuda, manifestaciones y peleas en cualquier ámbito compartido por partidarios y adversarios de la República. En las derechas, la Guerra Civil integró a conservadores autoritarios, nacionalistas, filofascistas y católicos integristas en una común reacción contra el liberalismo democrático. En el campo contrario, terminó de soldar el bloque de solidaridades que iba desde el radicalismo hasta el comunismo, pasando por socialistas, demoprogresistas, los estudiantes de la Federación Universitaria, los dirigentes sindicales agrupados en la CGT y un vasto sector de opinión independiente y progresista, que

también incluía figuras del liberalismo conservador. Salvo éstos, probablemente eran los mismos que en 1931 habían apoyado la Alianza Civil de De la Torre y Repetto; pero lo cierto es que la España republicana, y la convicción de que las democracias se aprestaban a dar una batalla final contra el fascismo, creaba un polo de solidaridad e identificación mucho más atractivo y movilizador.

Una parte importante de ese arco se asentaba en el mundo intelectual, cuya politización se acentuó en la segunda mitad de la década. La Reforma Universitaria, con su ideología genéricamente antiimperialista, democrática y popular, empezaba a penetrar en la política: algunos de sus principales dirigentes se incorporaron a los partidos -José Peco, al Radical; Alejandro Korn y Julio V. González, al Socialista; Rodolfo Aráoz Alfaro, al Comunista- y otros tuvieron militancia independiente, como Deodoro Roca y Saúl Taborda. Similar combinación de lo académico y lo político, desde una perspectiva progresista, se encuentra en el Colegio Libre de Estudios Superiores -una suerte de universidad popular- fundado en 1930, orientado tanto a los temas de alta cultura como a la discusión de las cuestiones políticas, económicas y sociales. La misma combinación se encuentra en la revista *Claridad*, dedicada al ensayo, la crítica y los temas políticos, que fueron ocupando un espacio creciente. *Claridad*, que además editaba diversas colecciones populares de literatura y ensayo, reunió a muchos de los intelectuales y escritores que habían militado en el grupo Boedo, y que habían definido una opción por el “arte comprometido”; entre ellos, Leónidas Barletta creó en 1931 el Teatro del Pueblo, donde por 20 centavos podía verse a Ibsen, Andreiev o Arlt. Ese mismo año, los herederos de Florida, partidarios de la renovación estética y de la “creación pura”, se nuclearon en la revista *Sur*, fundada por Victoria Ocampo. Es significativo que ambos grupos se alinearan -aunque con distinto entusiasmo- en el bando de los defensores de la democracia.

La instalación de algunas editoriales creadas por emigrados españoles -Losada, Emecé y Sudamericana, entre ellas- multiplicó la actividad del mundo intelectual y artístico y dio trabajo a escritores, traductores y críticos. Esta actividad se prolongaba naturalmente fuera de los ámbitos intelectuales, en infinidad de publicaciones populares y conferencias, por obra de un amplio grupo de militantes de la cultura, que a menudo también lo eran de la política, sobre todo a medida que el clima de polarización se iba extendiendo. Había en todo este movimiento una tendencia fuerte al análisis de los problemas de la sociedad, la crítica y la propuesta de soluciones alternativas para cuestiones específicas: la educación, la salud, la cuestión agraria, la condición de la mujer. Aunque en muchos aparece la referencia a la Unión Soviética, se trata más bien de un modelo de sociedad organizada racionalmente antes que de una incitación a la toma violenta del poder. Lo que predomina es el espíritu reformista y la convocatoria a todos quienes coinciden en la aspiración al progreso, la libertad, la democracia y una sociedad más justa.

Muchas de esas preocupaciones están presentes en la CGT, máxima representación de los obreros organizados. Había nacido en 1930, uniendo a los grupos sindicalistas y socialistas hasta entonces separados. Sus primeros años fueron azarosos: la dura represión gubernamental, aunque dirigida a anarquistas y comunistas, disuadía de cualquier acción demasiado militante, que por otra parte estaba lejos de las intenciones de los dirigentes, predominantemente “sindicalistas”; la fuerte desocupación provocada por la crisis restaba capacidad de movilización, pese a que no faltaban motivos: los salarios cayeron mucho, y sólo en 1942 se recuperó el nivel de 1929.

Desde 1933, la recuperación económica y la reorientación industrial empezaron a hacerse notar. La desocupación fue en forma

gradual absorbida, y empezó lentamente el movimiento de migrantes de las zonas rurales hacia los grandes centros urbanos, atraídos por el nuevo empleo industrial. En Buenos Aires, hasta mediados de la década, este crecimiento se radicó en los barrios periféricos de la ciudad para ir luego engrosando progresivamente el cinturón suburbano. Entre las organizaciones gremiales seguían dominando los grandes sindicatos del transporte y los servicios: la poderosa Unión Ferroviaria en primer lugar -verdadero ejemplo de organización-, la Fraternidad, de los maquinistas de trenes, la Unión Tranviaria, los municipales, los empleados de comercio. Pero poco a poco fueron creciendo los grupos de trabajadores de las nuevas industrias manufactureras o de la construcción; allí los dirigentes comunistas tuvieron éxito en organizar sindicatos que agruparan los antiguos oficios por ramas de industria: metalúrgicos, textiles, madereros, alimentarios -entre los cuales dominaban los trabajadores de la carne- y sobre todo obreros de la construcción. Con más de cincuenta mil afiliados, la Federación Obrera Nacional de la Construcción era hacia 1940 el segundo sindicato, detrás de la Unión Ferroviaria, que rondaba los cien mil.

Adormecida en los años inmediatamente posteriores a la crisis, la actividad sindical resurgió hacia 1934 y creció mucho en los años siguientes hasta 1937, acompañando el ciclo económico. Los dirigentes sindicales de entonces -comandados por los ferroviarios- mantuvieron la tendencia gestada en la década anterior de deslindar sus reclamos gremiales de los planteos políticos más generales, y esto valió incluso para muchos que pertenecían al Partido Socialista. Gradualmente obtuvieron algunas mejoras, pero concedidas en forma parcial y aplicadas a regañadientes. Los ferroviarios pudieron salvar sus empleos a pesar de la crisis, pero a costa de una reducción salarial. Los empleados de comercio lograron una ley que establecía la licencia por enfermedad y la indemnización por despido, pero fue

vetada por el presidente Justo en 1932, aunque luego fue sancionada. La jornada de trabajo se redujo progresivamente, en especial por la generalización paulatina del “sábado inglés”, y en algunas actividades se instrumentaron sistemas de jubilación, pero en ningún caso existieron las vacaciones pagas.

El Estado no ignoró ni los reclamos ni la importancia de este actor social. El presidente Roberto M. Ortiz, que había sucedido a Justo en 1938, no sólo mantuvo buenos contactos con los ferroviarios, sino que procuró formarse entre ellos una base de apoyo, interviniendo activamente en sus conflictos internos. El gobernador Fresco fue más allá; siguiendo las prácticas del Estado fascista italiano, declaró que su objetivo era armonizar el capital y el trabajo. Al tiempo que reprimía con dureza a los comunistas, legalizaba los sindicatos y utilizaba el poder arbitral del Estado para proteger a los trabajadores. Más discretamente, el Departamento Nacional del Trabajo -que realizó una notable tarea de recopilación de información- fue extendiendo de manera gradual la práctica del convenio colectivo y del arbitraje estatal; sus frutos se aprecian en la cantidad de huelgas resueltas por algún tipo de transacción.

Entenderse directamente con uno de los actores principales de la sociedad formaba parte de la estrategia general del Estado intervencionista y dirigista y, a la vez, coincidía con la tendencia de sus dirigentes a reducir el espacio de la política partidaria y de las instituciones representativas, como el Congreso. Reconocer la importancia del Estado y hacer de él su interlocutor principal constituía también una tendencia muy fuerte entre los dirigentes sindicales. Esta tendencia -denominada “sindicalista”- fue criticada por quienes, desde los partidos políticos opositores, empezaron a dar prioridad a los reclamos democráticos y al enfrentamiento político con el gobierno, y presionaron para alinear en él a las organizaciones sindicales. Un conflicto interno de la Unión

Ferroviaria condujo a fines de 1935 -en el marco de una agitación sindical creciente- a una renovación radical de la conducción de la CGT y a un peso mayor de los dirigentes gremiales firmemente alineados con el Partido Socialista; a la vez, permitió el ingreso progresivo a la conducción de los comunistas, cuya fuerza sindical era creciente. Unos y otros impulsaron el acto del 1º de Mayo de 1936, con la participación de los partidos políticos que debían integrar el Frente Popular. Esa coincidencia no se repitió, y en 1939 incluso se separaron socialistas y comunistas, divididos cuando Stalin pactó con Hitler. Por entonces, la agitación sindical estaba mermando, y las dificultades del Frente Popular eran crecientes.

La pieza clave del frente era la UCR. El levantamiento de la abstención electoral, en 1935, había sido impulsado por los sectores más conciliadores del partido, que rodeaban a Marcelo T. de Alvear. Con fuerte peso en la Cámara de Diputados y en el Concejo Deliberante, el radicalismo contribuyó a mejorar la imagen de las instituciones, cuya legitimidad se hallaba fuertemente cuestionada, así como a convalidar algunas de las decisiones más controvertidas, como la renovación de las concesiones eléctricas de la Capital, una medida que, según probó una investigación posterior, aportó al partido una generosa gratificación. Pero la vuelta a la lucha política también aumentó las posibilidades de manifestación de los grupos más avanzados del radicalismo, nutridos de jóvenes veteranos de la militancia universitaria y que reivindicaban una tradición yrigoyenista. Sabattini, en Córdoba, sostuvo un programa muy innovador en lo social, y en la Capital los opositores a Alvear constituyeron una tendencia fuerte, que criticó el electoralismo conciliador de los dirigentes, mientras que el grupo Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), constituido en 1935, comenzó a definir una línea más preocupada por los problemas nacionales. El propio Alvear oscilaba entre ambas

corrientes: jefe natural de los conciliadores, sus propuestas de 1937, cuando compitió en la elección presidencial, recogían mucho del discurso progresista y de izquierda afín con el esbozado Frente Popular.

En esa ocasión, sólo lo acompañó formalmente el Partido Comunista, pues el Socialista se hallaba en franca competencia con el radical. Hasta 1936, los socialistas habían tenido una fuerte representación parlamentaria, que se redujo drásticamente con el retorno electoral de los radicales. Al mismo tiempo, mejoró su situación en el campo gremial, con la nueva dirección de la CGT, pero en 1937 sufrió la escisión de un grupo de militantes disconformes con la anquilosada elite dirigente: muchos de quienes por entonces integraron el Partido Socialista Obrero pasaron luego al Partido Comunista, y este conflicto, profundizado en 1939 luego de la firma del pacto nazi-soviético, complicó las alianzas de un Frente Popular por entonces cada vez más problemático.

La consigna de la democratización, despojada de sus aristas más radicalizadas, resultó tentadora para grupos del oficialismo, preocupados por la legitimidad del régimen y espoleados por disputas internas crecientes. En 1937, el presidente Justo pudo imponer a sus partidarios la candidatura presidencial de Roberto M. Ortiz, de origen radical antipersonalista como él, pero debió aceptar para la vicepresidencia a un representante de los grupos conservadores más tradicionales: el catamarqueño Ramón S. Castillo. Para enfrentar la candidatura de Alvear se recurrió sin disimulos a procedimientos fraudulentos que -según Pinedo- hacían “imposible catalogar esas elecciones entre las mejores ni entre las regulares que ha habido en el país”. A Ortiz le resultó más difícil que a Justo mantener el equilibrio con los grupos conservadores de su partido, y menos aún con los nacionalistas, fuertes en la calle y en el Ejército. A la vez, lo atrajo la posibilidad de

acercarse al radicalismo; con el apoyo de Alvear, Ortiz se propuso depurar los mecanismos electorales y desplazar a los dirigentes conservadores de sus principales bastiones. En febrero de 1940, intervino la provincia de Catamarca -de donde provenía el vicepresidente- y al mes siguiente hizo lo mismo con la de Buenos Aires, cuando el gobernador Fresco se aprestaba a transferir el mando a Alberto Barceló, el ejemplo más conspicuo del caudillismo fraudulento y gansteril. Ese mes, los radicales triunfaron en las elecciones de diputados y consolidaron su predominio en la Cámara.

Pero cuando todo parecía conducir al triunfo de esta versión del programa de la democratización, oficialista y de derecha, aunque también apoyado al comienzo por el Partido Comunista, la enfermedad del presidente Ortiz lo obligó en julio de 1940 a delegar el mando en el vicepresidente Castillo. Aunque trató de resistirse a su sino, finalmente debió renunciar en forma definitiva, luego de presenciar cómo Castillo deshacía todo lo construido en pro de la democratización. A fines de 1940, en las elecciones provinciales, volvieron a usarse los peores métodos fraudulentos. En octubre de 1941, y probablemente por presión de los militares, Castillo disolvió el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, sin despertar con esta medida mayores resistencias. Así, el intento de democratización iniciado en 1936 se desmoronaba a fines de 1940. Este fracaso sin duda tenía que ver con el cambio de la coyuntura internacional que lo había alimentando: los frentes populares habían sido derrotados en España y en Francia, el nazismo acumulaba triunfos militares contundentes en el inicio de la guerra, la Unión Soviética desertaba del campo antinazi y la guerra generaba alineamientos diferentes.

Sin embargo, la corriente que desde 1936 había hecho de la democracia un punto de convergencia contra los herederos de

septiembre se había afirmado también en un proceso más específico de la sociedad. La democracia, concedida en 1912, había arraigado lenta y progresivamente en la sociedad. Una red de asociaciones de distinto tipo, destinadas a canalizar hacia las autoridades los reclamos de sus diferentes sectores, contribuyó a la vez a la formación de los ciudadanos, al desarrollo de los hábitos y de las prácticas de participación, al ejercicio de los derechos. La tarea docente realizada por el amplio movimiento intelectual y político de corte progresista y de izquierda contribuyó a moldear a los “ciudadanos educados” característicos de esta década. Ciertamente fue un proceso desigual, mucho más visible en las grandes ciudades que en las zonas rurales, pero no por eso menos real, y capaz de afirmarse pese a las restricciones que desde el Estado se pusieron a la vida política partidaria, y a su desnaturalización por las prácticas fraudulentas. Quizá los partidos no supieron canalizar y dar forma a esa movilización democrática, encontrar el punto de acuerdo entre ellos y adoptar una posición verdaderamente opositora. Quienes debían enfrentar categóricamente al gobierno fraudulento optaron por las transacciones, y contribuyeron a un progresivo descreimiento ciudadano: las banderas de la regeneración democrática habían pasado a miembros del mismo régimen. Pero en verdad, desde el Estado se contribuyó en mucho a esa descalificación de los partidos políticos y del mismo sistema representativo: mientras la política quedaba asociada con el fraude, el Estado encaraba la negociación de las cuestiones de gobierno directamente con los distintos actores de la sociedad -los sindicatos, los empresarios, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y hasta las asociaciones civiles- ignorando al Congreso y a los partidos políticos.

LA GUERRA Y EL “FRENTE NACIONAL”¹

La guerra mundial que se desencadenó en septiembre de 1939 cambió gradualmente el panorama político, reacomodó a los distintos grupos internos -sobre todo acercó posiciones entre los radicales y algunos sectores conservadores- y planteó nuevas opciones. Pero las diferentes alternativas no se superpusieron ni recortaron en forma definida a los actores políticos, de modo que en los años iniciales de la guerra los alineamientos fueron confusos y contradictorios.

El primer impacto lo produjo sobre las relaciones comerciales y económicas con Gran Bretaña y Estados Unidos. El progresivo cierre de los mercados europeos -provocado por los triunfos alemanes- redujo drásticamente las exportaciones agrícolas, pero en cambio aumentaron mucho las ventas de carne a Gran Bretaña, tanto enfriada como congelada. Como a la vez disminuyeron las importaciones de origen británico, la Argentina empezó a tener con el Reino Unido un importante saldo a su favor; en 1939, un acuerdo entre el Banco Central y el Banco de Inglaterra estableció que las libras permanecerían bloqueadas en Londres durante la contienda, y que, concluida ésta, se aplicarían a saldar las deudas por compras de productos británicos o a repatriar títulos de la deuda. Por otra parte, aprovechando las dificultades en todo el comercio internacional, y una suerte de “vacío de poder” regional, se empezaron a exportar a países limítrofes productos industriales: las ventas de textiles, confecciones, alimentos y bebidas, calzado y productos químicos acentuaron el crecimiento industrial iniciado con la sustitución de importaciones y el país empezó a tener saldos comerciales favorables, incluso con Estados Unidos.

La novedosa situación confirmaba las expectativas de muchos:

los cambios creados por la crisis de 1930 se profundizaban y la vuelta a la normalidad, es decir, a la situación existente antes de la crisis, se hacía cada vez más remota. Entre los sectores empresarios comenzaron a discutirse distintas alternativas, sin que se definieran claramente ni intereses ni alineamientos fijos. Las exportaciones tradicionales parecían tener pocas perspectivas en el largo plazo, pasada la coyuntura de guerra que beneficiaba a los ganaderos, pero en cambio las exportaciones industriales, y en general la expansión de este sector, tuvieron perspectivas promisorias. En cualquier caso, esas alternativas implicaban aumentar la intervención del Estado en la regulación económica, y también un cierre mayor de la economía local.

En noviembre de 1940, Pinedo, designado ministro de Hacienda por Castillo, formuló una evaluación lúcida de este nuevo escenario y una propuesta audaz y desprejuiciada. Su Plan de Reactivación Económica proponía, como salida a las dificultades generadas por la guerra, insistir en la compra de las cosechas por parte del Estado, para sostener su precio, y a la vez estimular la construcción, pública y privada, capaz de movilizar muchas otras actividades; sobre todo, remarcaba la importancia de estimular la industria: si el comercio exterior seguía siendo la “rueda maestra” de la economía, estas otras actividades, “ruedas menores”, contribuirían al equilibrio general. Pinedo advertía el problema de una economía excesivamente cerrada en sí misma y proponía estimular las industrias “naturales”, que elaboraran materias primas locales y pudieran exportar a los países vecinos y a Estados Unidos. Por esa vía, a largo plazo, la Argentina habría de solucionar un déficit comercial con el país del Norte, que sin duda se haría más gravoso a medida que fuera creciendo el sector industrial y aumentara la demanda de máquinas, repuestos o combustibles.

Se trataba de una operación compleja, que modificaba los

términos de la relación triangular, proponiendo una vinculación estrecha con Estados Unidos, e incluso apuntaba a una inserción sustancialmente distinta de la Argentina en la economía mundial. Requería de una firme orientación por parte del Estado y de un desarrollo mayor de sus instrumentos de intervención. El Estado debía movilizar el crédito privado, orientándolo hacia inversiones de largo plazo, entre ellas las industriales. Las exportaciones de productos manufacturados se beneficiarían con sistemas de reintegros, leyes contra el *dumping* y una intensa promoción del intercambio.

El proyecto fue aprobado por el Senado, con mayoría oficialista, pero la Cámara de Diputados no lo trató. Como señaló J. J. Llach, su fracaso fue político antes que económico. Los radicales, que eran la mayoría y no tenían objeciones de fondo a la propuesta -incluso retomaron luego partes de ésta-, habían decidido bloquear cualquier proyecto oficial como una forma de repudio a la nueva orientación fraudulenta del gobierno de Castillo. Pinedo intentó solucionar el problema entrevistándose con Alvear, pero no logró convencer al jefe radical, e incluso debió renunciar por ello al ministerio. El “bloque democrático”, que reclamaba un compromiso diplomático más estrecho con Estados Unidos, no advirtió las ventajas de este plan, que suponía la clausura del férreo bilateralismo con Gran Bretaña. Tal situación revela lo confusos que por entonces eran los alineamientos.

La otra dimensión del triángulo -la diplomática- marchaba por carriles diferentes. Desde 1932, con Roosevelt, Estados Unidos había modificado sustancialmente su política exterior, al menos en sus formas: la clásica del “garrote” fue reemplazada por la de la “buena vecindad”; Estados Unidos aspiraba a estrechar las relaciones bilaterales, y en el marco del panamericanismo, a alinear detrás de sí al “hemisferio”. Esto era particularmente difícil con la

Argentina: el comercio bilateral -vieja aspiración de los productores rurales argentinos- estaba obstaculizado por la oposición del llamado “*farm block*”, es decir, los intereses agrarios competidores de la Argentina. La subordinación era también difícil de aceptar para un país que todavía aspiraba a una posición independiente y hasta hegemónica en el Cono Sur, y que tradicionalmente se había opuesto a la dirección estadounidense, contraponiendo a la fórmula “América para los americanos”, del presidente Monroe, la de “América para la humanidad”, es decir, vinculada de manera estrecha con Europa.

Los gobernantes de la década del treinta persistieron en ese rumbo tradicional, y en las sucesivas conferencias panamericanas hicieron todo lo posible para poner obstáculos al alineamiento. En 1936, en la celebrada en Buenos Aires -a la que concurrió Roosevelt, transportado por un crucero de guerra-, una enmienda de último momento impuesta por el canciller Saavedra Lamas relativizó una declaración sobre consulta entre gobiernos en caso de agresión extracontinental, en la que los estadounidenses habían puesto mucho empeño; en 1938 el canciller José María Cantilo desairó a sus colegas abandonando sorpresivamente la reunión de Lima antes de la firma de la declaración final.

La neutralidad en caso de guerra europea también era una tradición argentina. Su adopción en 1939 -una medida lógica, pues permitía seguir comerciando con los tradicionales clientes- no fue objetada por Estados Unidos, que propuso precisamente esa política común en la reunión de Cancilleres de Panamá en 1939. Por entonces, el gobierno de Ortiz procuraba acercarse a Estados Unidos, en el contexto de su política democratizadora, y lo mismo hizo el primer canciller de Castillo, Julio A. Roca, que acompañó la gestión de Pinedo. Pero progresivamente la guerra se impuso en las discusiones internas y empezó a revivir los agrupamientos de la

opinión que asociaban el apoyo a los aliados con la reivindicación de la democracia y el ataque al gobierno. En junio de 1940 se constituyó Acción Argentina, dedicada a denunciar las actividades de los nazis en el país y la injerencia de la embajada alemana. En ella participaron radicales, socialistas, muchos intelectuales independientes y muchos conspicuos miembros de la oligarquía conservadora. Acción Argentina se diferenciaba del antiguo Frente Popular por la presencia de estos recientes conversos a los valores de la democracia, lo que reflejaba las perplejidades y divisiones de quienes hasta entonces habían apoyado al gobierno de la Concordancia. También, por dos ausencias conspicuas: el Partido Comunista, que a consecuencia del pacto Hitler-Stalin había optado por denunciar por igual a ambos imperialismos, y el grupo de radicales opositores a la conducción de Alvear, entre quienes descollaban los militantes de FORJA, muy activos en denunciar, al igual que los comunistas, el carácter interimperialista de la guerra.

El panorama cambió sustancialmente en la segunda mitad de 1941. En junio Hitler invadió la Unión Soviética y en diciembre los japoneses atacaron a los estadounidenses; Estados Unidos entró en la guerra y procuró forzar a los países americanos a acompañarlo. En enero de 1942, se reunió en Río de Janeiro la Conferencia Consultiva de Cancilleres, y nuevamente la oposición argentina frustró los planes estadounidenses: la decisión de que todos los países del hemisferio entraran en guerra fue cambiada por una simple “recomendación” debido a la férrea oposición del canciller argentino Enrique Ruiz Guiñazú, que había reemplazado a Roca. Para Estados Unidos estaban en juego intereses específicos, pero sobre todo una cuestión de prestigio, y respondió con fuertes represalias: la Argentina fue excluida del programa de rearme de sus aliados en la guerra -mientras Brasil era particularmente beneficiado- y los grupos democráticos, opositores al gobierno,

empezaron a recibir fuerte apoyo de la embajada.

El frente que se agrupaba en torno de las consignas democráticas y rupturistas empezó a crecer, engrosado ahora por los comunistas -nuevamente partidarios de combatir al nazifascismo- y por conspicuos conservadores, como Pinedo y el general Justo, a quienes la opción entre el fascismo y la democracia los llevaba a alinearse con sus antiguos adversarios. La Comisión de Investigación de Actividades Antiargentinas, creada por la Cámara de Diputados, se dedicó a denunciar la infiltración nazi, y en una serie de actos públicos se proclamó simultáneamente la solidaridad con Estados Unidos y la oposición al fraude. En esa caracterización de amigos y enemigos, ciertamente simplificadora, predominaban las necesidades retóricas y políticas. El gobierno de Castillo no necesitaba simpatizar con los nazis -un adjetivo aplicado con amplitud- para aferrarse a la neutralidad. Bastaba con mantener la continuidad de una tradición política del Estado -otrora sostenida por Yrigoyen- y sumarles alguna lealtad a los tradicionales socios británicos, que veían con alarma cómo, con motivo de la guerra, Estados Unidos avanzaba sobre sus últimos baluartes. Pero había además una razón política clara: los rupturistas, que asumían la bandera democrática, condenaban simultáneamente al gobierno fraudulento; quienes se mantenían fieles a él -y resistían la transacción que proponían otros, como Pinedo o Justo- encontraban en el neutralismo una buena bandera para cerrar filas y enfrentar a sus enemigos. Éstos eran cada vez más entre los políticos, por lo que Castillo optó por buscar apoyo entre los militares.

Castillo seguía aquí la tradición de sus antecesores. Justo cultivó a los militares, aumentó los efectivos bajo bandera, construyó notables edificios, como el Ministerio de Guerra, que eclipsaba a la mismísima Casa Rosada, pero a la vez se propuso despolitizar la

institución, acallar la discusión interna y mantener el equilibrio entre las distintas facciones. Sobre todo, logró mantener el control de los mandos superiores, lo que obligó a sus sucesores a apoyarse en los hombres de Justo. Ortiz encontró un ministro fiel en el general Márquez, quien fue derribado por un escándalo -sobre la compra de tierras en El Palomar- que tenía como destinatario final a su presidente. Castillo a su vez debió designar ministro de Guerra a otro justista, el general Tonazzi, pero se dedicó a cultivar a los jefes y a colocar progresivamente en los mandos a enemigos del expresidente. Bajo su gobierno se crearon la Dirección General de Fabricaciones Militares -cuyo primer director fue el coronel Savio- y el Instituto Geográfico Militar, impulsando así el avance de las Fuerzas Armadas sobre terrenos más amplios que los específicos. Durante su gobierno, la presencia de los militares fue cada vez más visible, así como la sensibilidad del presidente a las opiniones y presiones de los jefes militares. Rápidamente, las Fuerzas Armadas se constituyeron en un actor político.

Un elemento central del nuevo perfil militar fue el desarrollo de una conciencia nacionalista. El terreno había sido preparado por el nacionalismo uriburista, difundido por un grupo minoritario pero activo, de dentro y fuera de la institución. Era éste un nacionalismo tradicional, antiliberal, xenófobo y jerárquico. La guerra cambió las preocupaciones. Predominaba en el Ejército, tradicionalmente influido por el germanismo, un neutralismo visceral. Pero además veían que el equilibrio regional tradicional se alteraba por el apoyo de Estados Unidos a Brasil y la exclusión de la Argentina de los programas de rearme. La solución debía buscarse en el propio país, y así la guerra estimuló preocupaciones de tipo económico, pues la defensa requería de equipamiento industrial y éste, de insumos básicos. Desde mediados de la década el Ejército había ido montando distintas fábricas de armamentos. Desde 1941, y a través

de la Dirección de Fabricaciones Militares, se dedicó a promover industrias, como la del acero, que juzgaban tan “natural” como la alimentaria, e indispensable para garantizar la autarquía.

Los militares fueron encadenando las preocupaciones estratégicas con las institucionales y las políticas. La guerra demandaba movilización industrial y ésta, a su vez, un Estado activo y eficiente, capaz de unificar la voluntad nacional. Los ejemplos de Italia y Alemania lo demostraban fehacientemente, y así lo repetían los periódicos apoyados por la embajada alemana, como *El Pampero* o *Crisol*. También era importante el papel del Estado en una sociedad que seguramente sería acosada en la posguerra por agudos conflictos: la reconstitución del Frente Popular, las banderas rojas en los mítines obreros y la presencia en las calles del Partido Comunista parecían signos ominosos de ese futuro, y para enfrentarlo se requería orden y paz social. Ese ideal de Estado legítimo y fuerte, capaz de capear las tormentas de la guerra y la posguerra, poco se parecía al gobierno tambaleante y radicalmente ilegítimo del doctor Castillo. Ya desde 1941 hubo militares que empezaron a conspirar, mientras otros empujaban a Castillo por la senda del autoritarismo. Desde diciembre de 1942, cuando renunció el ministro Tonazzi, la deliberación se extendió en el Ejército.

Esa difusa pero pujante sensibilidad nacional no se limitaba al Ejército. Más que de una idea definida y precisa, se trataba de un conjunto de sentimientos, actitudes e ideas esbozados, presentes en vastos sectores de la sociedad. Si de ellos no podía deducirse una ideología en sentido estricto -pues habían posiciones divergentes y hasta antagónicas-, revelaron una gran capacidad, atribuible en parte al empeño de los militantes de algunas de sus tendencias parciales más definidas, para disolver antiguas polarizaciones y crear otras. Así, cuando todo parecía conducir al triunfo del Frente Popular, un “frente nacional” comenzó a dibujarse como

alternativa.

Las raíces de ese sentimiento nacional eran antiguas, pero en tiempos más recientes las habían abonado las corrientes europeas antiliberales, de Maurras a Mussolini, y con ellas había empalmado una Iglesia católica fortalecida en el integrismo. Sobre esta base había operado el nuevo nacionalismo, antibritánico. Al libro inicial de los Irazusta siguieron el de Scalabrini Ortiz sobre los ferrocarriles, y en general toda la prédica del grupo FORJA. En esta nueva inflexión, los enemigos de la nacionalidad no eran ni los inmigrantes, ni la “chusma democrática”, ni los “rojos”, sino Gran Bretaña y la oligarquía “entreguista”. Este antiimperialismo resultó un arma retórica y política formidable, capaz de convocar apoyos a derecha e izquierda, como lo demostró en 1935 Lisandro de la Torre: la consigna antiimperialista empezó a ser frecuente en los discursos de políticos radicales o socialistas, como Alfredo Palacios, de dirigentes sindicales y de intelectuales, que empezaron a encarar desde esa perspectiva el análisis de los problemas nacionales y muy particularmente los económicos.

En este campo, el nuevo nacionalismo compartía el terreno ya trabajado por el reformismo progresista de izquierda, y ambos podían coincidir en distintos foros. Con el nacionalismo tradicional de derecha se encontraba en otro terreno: el del revisionismo histórico, donde la condena a Gran Bretaña y sus agentes locales derivaba en una reivindicación de la figura de Rosas hecha en nombre de valores diversos y antitéticos, desde la emancipación nacional hasta el integrismo católico. En esa plasticidad radicó precisamente la capacidad de esta corriente para arraigar en una sociedad cuya preocupación por los temas nacionales se manifestaba de muchas otras maneras. En la literatura -sobre todo la difundida a través de publicaciones periódicas de amplia circulación- los temas rurales o camperos solían traer la

contraposición entre el interior nacional y el litoral gringo, o entre el mundo rural y criollo y el mundo urbano y extranjero. Los temas históricos, donde la presencia del Restaurador era frecuente, abundaban en los folletines, y también en exitosos radioteatros, como *Chispazos de tradición*, ávidamente consumidos.

La preocupación por lo nacional se manifestó, finalmente, en intelectuales y escritores. Tres notables ensayos expresaron intuiciones profundas sobre el “ser nacional” y dieron el marco a una amplia reflexión colectiva. En 1931, Raúl Scalabrini Ortiz publicó *El hombre que está solo y espera*; el hombre de “Corrientes y Esmeralda” amalgamaba las diferentes tradiciones de un país de inmigración, se definía por sus impulsos, intuiciones y sentimientos, que anteponía a cualquier elaboración o cálculo racional, y -recordando a Ortega y Gasset- construía con ellos una imagen de sí mismo y de lo que podía llegar a ser, que juzgaba más valiosa que su propia realidad. Para Eduardo Mallea, tal amalgama era dudosa; observaba la crisis del sentido de argentinidad, particularmente entre las elites, ganadas por la vida cómoda, el facilismo y la apariencia, y renunciando a la espiritualidad y las preocupaciones más profundas sobre el destino de la comunidad. En *Historia de una pasión argentina*, aparecida en 1935, contraponía esa “Argentina visible” a otra “invisible”, donde las nuevas elites, por el momento ocultas, se estaban formando en una “exaltación severa de la vida”. Ezequiel Martínez Estrada era más radicalmente pesimista, y veía a la colectividad argentina presa de un destino fatal, originado en la misma conquista. En *Radiografía de la pampa*, que se publicó en 1933, señaló la escisión entre unas multitudes anárquicas, que acumulaban el resentimiento originario del mestizo, y ciertas elites europeizantes e incapaces de comprender a esta sociedad y encarnar en ella un sistema de normas y de principios sustentado en creencias colectivas. Estos esfuerzos

por develar la naturaleza del “ser argentino”, inquiriendo en clave ontológica por los elementos singulares y esenciales de la sociedad y la cultura, aunque entroncaban en preocupaciones comunes de todo Occidente, eran sin duda la expresión intelectual de esta nueva inquietud común por entender, defender o constituir lo “nacional”.

La fuerza de esta corriente nacional, que en el caso de la guerra se inclinaba por el neutralismo, tardó en manifestarse. Por el momento, el grupo de los partidarios de la ruptura con el Eje iba ganando nuevos adeptos, especialmente entre los grupos conservadores. Sin embargo, en pocos meses los principales dirigentes del bloque democrático murieron: en marzo de 1942, Alvear; en los meses siguientes, el expresidente Ortiz -con cuyo hipotético retorno aún se especulaba- y el exvicepresidente Roca, y en enero de 1943, Agustín P. Justo, quien se perfilaba como el más firme candidato a encabezar una fórmula de acuerdo con los radicales. Encontrar candidatos no era fácil, y a la vez la posible victoria electoral parecía más que dudosa, a medida que el gobierno retornaba sin empacho a las prácticas fraudulentas: a fines de 1941, el conservador Rodolfo Moreno ganó en la provincia de Buenos Aires y al año siguiente la Concordancia triunfó en las elecciones legislativas. Poco antes, Castillo había clausurado el Concejo Deliberante y establecido el estado de sitio, e ignoraba ostensiblemente a la Cámara de Diputados. No obstante, la Concordancia enfrentaba el grave problema de la elección de su candidato. Castillo se inclinó finalmente por el senador Robustiano Patrón Costas, poderoso empresario azucarero salteño y figura destacada del Partido Demócrata Nacional, en una opción de sentido discutido, que muchos interpretaron como un seguro cambio de rumbo en la futura política exterior y que dividió aún más a sus partidarios.

Las dos alianzas políticas, que se sentían débiles, empezaron a

cultivar a los jefes militares, esperando que las Fuerzas Armadas ayudaran a desequilibrar una situación trabada y a fortalecer un régimen institucional cada vez más débil. Cultivando a los militares, Castillo contribuyó a debilitarlo aún más. Los radicales, por su parte, se sumaron al nuevo juego y especularon con la candidatura del nuevo ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez. Por su parte, los jefes militares discutieron casi abiertamente todas las opciones, y aparecieron grupos golpistas de diversa índole y tendencias, entre los cuales se destacó una logia, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que reunía a algunos coroneles y a otros oficiales de menor graduación. Muchos apostaban a la ruptura del orden institucional, sin que se perfilara el sujeto de la acción. Ésta finalmente se desencadenó cuando Castillo pidió la renuncia al ministro Ramírez. El 4 de junio de 1943, el Ejército depuso al presidente e interrumpió por segunda vez el orden constitucional, antes aun de haber definido el programa del golpe, y ni siquiera la figura misma que lo encabezaría.

IV. El gobierno de Perón, 1943-1955

EL GOBIERNO militar que asumió el 4 de junio de 1943 fue encabezado sucesivamente por los generales Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro J. Farrell. El coronel Juan Domingo Perón, uno de sus miembros más destacados, logró concitar un vasto movimiento político en torno de su persona, que le permitió ganar las elecciones de febrero de 1946, poco después de que su apoyo popular se manifestara en una jornada por demás significativa, el 17 de octubre de 1945. Perón completó su período de seis años y fue reelecto en 1951, para ser derrocado por un golpe militar en septiembre de 1955. En estos 12 años en que fue la figura central de la política, al punto de dar su nombre al movimiento que lo apoyaba, Perón y el peronismo imprimieron a la vida del país un giro sustancial y perdurable.

LA EMERGENCIA

La revolución del 4 de junio fue inicialmente encabezada por el general Rawson, quien renunció antes de prestar juramento, y fue reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez, ministro del último gobierno constitucional. El episodio es expresivo de la

pluralidad de tendencias existentes en el grupo revolucionario y de su indefinición acerca del rumbo a seguir, más allá de coincidir en la convicción de que el orden constitucional estaba agotado y que la proclamada candidatura de Patrón Costas no llenaría el vacío de poder existente. El nuevo gobierno suscitó variadas expectativas fuera de las Fuerzas Armadas, pues muchos concordaban con el diagnóstico, y además esperaban algo del golpe, incluso los radicales; sin embargo, se constituyó casi exclusivamente con militares, y el centro de las discusiones y las decisiones estuvo en el Ministerio de Guerra, controlado por un grupo de oficiales organizado en una logia, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), en torno del ministro de Guerra Farrell.

Los militares en el gobierno coincidían en la necesidad de acallar la agitación política y la protesta social: proscribieron a los comunistas, persiguieron a los sindicatos e intervinieron la Confederación General del Trabajo (CGT) -por entonces dividida-, disolvieron Acción Argentina, que nucleaba a los partidarios de romper relaciones con el Eje, y más tarde hicieron lo mismo con los partidos políticos, intervinieron las universidades dejando cesante a un vasto grupo de profesores de militancia opositora y finalmente establecieron la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Contaron con la colaboración de un elenco de nacionalistas y católicos integristas, algunos de antigua militancia junto a Uriburu, quienes dieron el tono al régimen militar: autoritario, antiliberal y mesiánico, obsesionado por la fundación de un orden social nuevo y por evitar el caos del comunismo que, según pensaban, sería la secuela inevitable de la posguerra. No le fue difícil a la oposición democrática identificar al gobierno militar con el nazismo.

Sin embargo, en el gobierno había, junto con algunos que simpatizaban con Alemania, otros proaliados y muchos partidarios

de mantener la neutralidad que había practicado el gobierno de Castillo, benevolente con Gran Bretaña. Por otra parte, en 1943 la guerra estaba evolucionando de un modo tal que un alineamiento con el Eje era impensable. De hecho, el acuerdo comercial con Gran Bretaña se mantuvo. Estados Unidos, en cambio, atacó con fuerza creciente a uno de los dos únicos gobiernos americanos renuentes a acompañarlo en la guerra con el Eje, y además sospechoso de apañar a los nazis. El Departamento de Estado emprendió una cruzada contra los militares, desinteresándose de las repercusiones internas de su acción e ignorando los gestos de acercamiento del gobierno argentino. Esto permitió a los más acérrimos partidarios de la neutralidad ganar posiciones, de modo que el conflicto se desenvolvió en una escalada creciente: para Estados Unidos -como ha subrayado C. Escudé- era una cuestión de prestigio y un imperativo moral acabar con los militares, y para éstos, una cuestión de principio no aceptar el *diktat* del Departamento de Estado. A principios de 1944, luego de que Ramírez decidiera romper relaciones con el Eje, fue desplazado por los oficiales más decididamente antiestadounidenses. Aislado en lo interno y también en lo externo, el gobierno se encontró metido en un callejón sin salida. Ésta fue finalmente proporcionada por uno de los oficiales que por entonces había ascendido en forma notable dentro del gobierno: el coronel Juan Domingo Perón, uno de los miembros más influyentes del GOU, secretario del ministro de Guerra Farrell y luego ministro, cuando Farrell reemplazó a Ramírez en la presidencia en febrero de 1944. Poco después, en julio, y luego de desplazar a varios posibles competidores, Perón llegó a ser vicepresidente y el alma verdadera del gobierno.

Perón sobresalía entre sus colegas por su capacidad profesional y por la amplitud de sus miras políticas. Una estadía en Europa en los años anteriores a la guerra le había hecho admirar los logros del

régimen fascista italiano, así como comprobar los terribles resultados de la Guerra Civil en España. La clarividencia y la preocupación lo llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta hasta entonces: el movimiento obrero. A cargo de la Dirección Nacional del Trabajo -que poco después convirtió en secretaría-, se dedicó a vincularse con los dirigentes sindicales. Todos fueron convocados, con excepción de los dirigentes comunistas, quienes luego de un frustrado acercamiento inicial, resultaron sistemáticamente perseguidos y erradicados de sus posiciones. Al resto se los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, que empezaron a ser satisfechas: además de dirimir conflictos específicos, por la vía de contratos colectivos, que supervisaba la Secretaría, se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, de accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y, en general, se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, incluso en la actividad misma de las plantas. En muchos casos se trataba simplemente de aplicar disposiciones legales ignoradas. La sanción del Estatuto del Peón innovó en lo sustancial, pues extendió estos criterios al mundo rural, introduciendo un elemento público en relaciones manejadas hasta entonces en forma paternal y privada.

Desde la Secretaría de Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro, esbozados durante el gobierno de Yrigoyen y apenas utilizados durante la década del treinta, con la excepción de Fresco en la provincia de Buenos Aires, y a la vez estimulaba la organización de los trabajadores, incentivaba sus reclamos y presionaba para que éstos fueran satisfechos. La reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto. Desde principios de siglo habían ido reconociendo el papel central del Estado en las relaciones con los patrones y se habituaron a negociar con él. Pero más recientemente, y ante gobiernos muy poco

interesados en desempeñar ese papel mediador, habían hecho un acuerdo con los partidos políticos opositores, en el que los reclamos sindicales se fundían con la demanda democrática, según las líneas de los frentes populares. La tendencia original sindicalista, sin embargo, no había desaparecido: en 1942, la CGT se dividió entre un sector más afín a los partidos opositores, encabezado por los comunistas y muchos de los dirigentes socialistas, y otro más identificado con la vieja línea sindicalista, donde se alineaban los gremios ferroviarios. La propuesta de Perón agudizó una discusión ya existente entre los dirigentes sindicales: el Frente Popular perdía atractivo, pero a la vez la polarización de la guerra lo revitalizaba; las mejoras ofrecidas eran demasiado importantes como para rechazarlas o enfrentar al gobierno, so pena de perder el apoyo de los trabajadores. Los sindicalistas adoptaron lo que Juan Carlos Torre llamó una estrategia oportunista: aceptaron el envite del gobierno sin cerrar las puertas a la “oposición democrática”.

Tampoco las cerraba el propio Perón, dispuesto a hablar con todos los sectores de la sociedad y la política, desde los radicales hasta los dirigentes de las sociedades de fomento, y capaz de sintonizar con cada uno el discurso adecuado, aunque dentro de una constante apelación a “todos los argentinos”. A sus colegas militares les señalaba los peligros que entrañaba la posguerra, la amenaza de desórdenes sociales y la necesidad de un Estado fuerte que interviniera en la sociedad y en la economía, y que a la vez asegurara la autarquía económica. En el Consejo Nacional de Posguerra que constituyó, insistió en la importancia de profundizar las políticas de seguridad social, así como de asegurar la plena ocupación y la protección del trabajo, ante la eventual crisis que pudieran sufrir las industrias crecidas con la guerra. A los empresarios les señaló la amenaza que entrañaban las masas obreras desorganizadas y el peligro del comunismo, que se veía avanzar en

Europa. Ante unos y otros se presentaba como quien podía canalizar esa efervescencia, si lograba para ello el poder necesario. Pero los empresarios fueron desconfiando cada vez más del “bombero piromaniaco” -según la feliz imagen de A. Rouquié- que agregaba combustible a la caldera, hasta el límite de su estallido, y al mismo tiempo controlaba la válvula de escape. Progresivamente, las agrupaciones patronales fueron tomando distancia de Perón y de la política de la secretaría, mientras éste en paralelo acentuaba su identificación con los obreros, subrayaba su prédica anticapitalista y desarrollaba ampliamente en su discurso los motivos de la justicia social. A la vez, se fueron reduciendo las reticencias de los dirigentes sindicales, quienes encontraban en los partidos democráticos un eco y un interés mucho menor que el demostrado por el coronel Perón.

La oposición democrática, que para definir su propia identidad había encontrado en el gobierno militar un enemigo mucho más adecuado que el viejo régimen oligárquico, empezó a reconstituirse a medida que el avizorado fin de la guerra hacía más difícil la intransigencia del gobierno. La liberación de París, en agosto de 1944, dio pie a una notable manifestación claramente antigubernamental, y desde entonces un vigoroso movimiento social ganó la calle y revitalizó los partidos políticos. El gobierno mismo estaba en retirada: en marzo de 1945, y ante la inminencia del fin del conflicto, aceptó el reclamo de Estados Unidos -donde una nueva conducción en el Departamento de Estado prometía una relación más fácil- y declaró la guerra al Eje, condición para ser admitidos en las Naciones Unidas, que empezaban a constituirse. Al mismo tiempo, y por iguales razones, liberalizó su política interna. Los partidos opositores reclamaron la retirada lisa y llana de los gobernantes y la entrega del poder a la Corte Suprema, último vestigio de la legalidad republicana, y sellaron su acuerdo para las elecciones que veían próximas: la Unión Democrática expresaría el

repudio de la civilidad a los militares y la total adhesión a los principios de los vencedores en la guerra. El frente político, que incluía a comunistas, socialistas y demoprogresistas, y contaba con el apoyo implícito de los grupos conservadores, estaba animado por los radicales, aunque un importante sector del partido, encabezado por el cordobés Amadeo Sabattini, rechazó la estrategia “unionista” y reclamó una postura intransigente y “nacional”, que apostaba a algunos interlocutores en el Ejército, adversos a Perón. Esa posición no prosperó, y la Unión Democrática fue definiendo su frente y sus alianzas: en junio de 1945 un Manifiesto de la Industria y el Comercio repudiaba la legislación social del gobierno. En septiembre de 1945, una multitudinaria Marcha de la Constitución y de la Libertad terminó de sellar la alianza política, pero también social, que excluía a la mayoría de los sectores obreros, otrora animadores del Frente Popular.

El Ejército, presionado por la opinión pública y ganado por la desconfianza al coronel sindicalista, forzó su renuncia el 8 de octubre, pero no encontró una alternativa: el general Ávalos, nuevo ministro de Guerra, y la oposición democrática especularon con varias opciones, pero no pudieron definir ningún acuerdo. En medio de esas vacilaciones un hecho novedoso volvió a cambiar el equilibrio: una multitud se concentró el 17 de octubre en la Plaza de Mayo reclamando por la libertad de Perón y su restitución a los cargos que tenía. Los partidarios de Perón en el Ejército volvieron a imponerse, el coronel habló a la multitud en la plaza y volvió al centro del poder, ahora como candidato oficial a la presidencia.

Lo decisivo de la jornada de octubre no residió tanto en el número de los congregados -quizás inferior al de la Marcha de la Constitución y de la Libertad de septiembre- cuanto por su composición, definidamente obrera. Su emergencia coronaba un proceso hasta entonces callado de crecimiento, organización y

politización de la clase obrera. La industrialización había avanzado sustantivamente durante la guerra, tanto para exportar a los países vecinos cuanto para sustituir las importaciones, escasas por las dificultades del comercio y también por el boicot estadounidense. Lo cierto es que la ocupación industrial había crecido y que la masa de trabajadores industriales había empezado a engrosar con migrantes rurales, expulsados por la crisis agrícola. No fue un crecimiento visible, pues a menudo se desarrolló en la periferia de las grandes ciudades, como Rosario, La Plata o Buenos Aires, pero sobre todo porque no se trataba de un actor social cuya presencia fuera esperada, ni siquiera para un observador tan sagaz como Ezequiel Martínez Estrada, que lo ignoró en su versión de 1940 de *La cabeza de Goliat*. Pero allí estaban, cada vez más compactos en torno de unos sindicatos de fuerza acrecida, cada vez más entusiasmados con la política de Perón, y finalmente cada vez más inquietos por su renuncia. En el marco de sus organizaciones, y encabezados por sus dirigentes, quienes todavía no habían despejado todas sus dudas respecto del coronel, marcharon el 17 a la Plaza de Mayo, el centro simbólico del poder, materializando un reclamo que en primer lugar era político, pero que tenía profundas consecuencias sociales. Decidieron la crisis en favor de Perón, inauguraron una nueva forma de participación, a través de la movilización, definieron una identidad y ganaron su ciudadanía política, sellando al mismo tiempo con Perón un acuerdo que ya no se rompería. Probablemente algunos de esos significados no fueron evidentes desde un principio -muchos creyeron ver en ellos a los sectores marginales de los trabajadores, la “chusma ignorante” o el “lumpemproletariado”- pero, en forma paulatina se fueron revelando, al tiempo que una imagen mítica y fundacional iba recubriendo y ocultando la jornada de octubre real.

Con las elecciones a la vista, Perón y quienes lo apoyaban se

dedicaron a organizar su fuerza electoral. Los dirigentes sindicales, fortalecidos por la movilización de octubre, decidieron crear un partido político propio, el Laborista, inspirado en el que acababa de triunfar en Inglaterra. Su organización aseguraba el predominio de los dirigentes sindicales, y su programa recogía diversos motivos, desde los más estrictamente socialistas hasta los vinculados con el dirigismo económico y el Estado de bienestar. En el nuevo partido, Perón era, nada más o nada menos, el primer afiliado y el candidato presidencial, una posición todavía distante de la jefatura plena que asumiría luego. Quizá para buscar bases de sustentación alternativas, o para recoger apoyos más amplios fuera del mundo del trabajo, Perón promovió una escisión en el radicalismo, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, a la que se integraron unos pocos dirigentes de prestigio, de entre quienes eligió a Jazmín Hortensio Quijano -un anciano y pintoresco dirigente correntino- para acompañarlo en la fórmula. Las relaciones entre laboristas y radicales renovadores fueron malas: aquéllos pretendían que el coronel Domingo Mercante, que había secundado a Perón en la Secretaría de Trabajo, lo acompañara en la fórmula, pero debieron conformarse con colocarlo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Apoyaron también a Perón muchos dirigentes conservadores de segunda línea, y sobre todo lo respaldaron el Ejército y la Iglesia, que en una pastoral recomendó, con pocos eufemismos, votar por el candidato del gobierno que había perseguido al comunismo y establecido la enseñanza religiosa.

La Unión Democrática incluyó a los partidos de izquierda, pero -por la impugnación de los radicales intransigentes- excluyó a los conservadores, que debieron resignarse a apoyarla desde fuera o pasarse calladamente al bando de Perón, como hicieron muchos, movidos por la vieja rivalidad con el radicalismo. Sus candidatos - José P. Tamborini y Enrique Mosca- provenían del riñón de la

conducción alvearista del radicalismo. Su programa era socialmente progresista -tanto quizá como el de Perón-, pero su impacto quedó diluido por el entusiasta apoyo recibido de las organizaciones patronales. Sin embargo, para sus dirigentes y para las masas que esta coalición movilizaba, lo esencial pasaba por la defensa de la democracia y la derrota del totalitarismo, que había sucedido y en cierto modo prolongado al gobierno fraudulento. Así se había pensado la política en los últimos diez años, con la segura convicción de que, en elecciones libres, los adalides de la democracia ganarían.

Pero el país había cambiado, en forma lenta y gradual quizás, aunque el descubrimiento de esas transformaciones fue brusco y espectacular. Perón asumió plenamente el discurso de la justicia social, de la reforma justa y posible, a la que sólo se oponía el egoísmo de unos pocos privilegiados. Estas actitudes sociales, arraigadas en prácticas igual de consistentes, se venían elaborando en los diez o veinte años anteriores, lo que explica el eco suscitado por las palabras de Perón, que contrapuso la democracia formal de sus adversarios a la democracia real de la justicia social, y dividió la sociedad entre el “pueblo” y la “oligarquía”. Un segundo componente de estos cambios, las actitudes nacionalistas, emergió en forma brusca como respuesta a la intempestiva intervención en la elección del embajador estadounidense Spruille Braden, quien, reanudando el virulento ataque del Departamento de Estado contra Perón, acusado de ser un agente del nazismo, respaldó públicamente a la Unión Democrática. La respuesta fue contundente: “Braden o Perón” agregó una segunda y decisiva antinomia y terminó de configurar el bloque del nacionalismo popular, capaz de enfrentar a lo que quedaba del Frente Popular.

El 24 de febrero triunfó Perón por alrededor de 300 mil votos de ventaja, equivalentes a menos del 10% del electorado. Fue un

triunfo claro pero no abrumador. En las grandes ciudades, fue evidente el enfrentamiento entre los grandes agrupamientos de trabajadores y los de clases medias y altas, pero en el resto del país las divisiones tuvieron un significado más tradicional, vinculado al peso de ciertos caudillos, al apoyo de la Iglesia o a la decisión de sectores conservadores de respaldar a Perón. Perón había ganado, pero el peronismo estaba todavía por construirse.

MERCADO INTERNO Y PLENO EMPLEO

El nuevo gobierno mantuvo la retórica antiestadounidense, que elaboró luego en la doctrina de la “tercera posición”, distanciada tanto del comunismo como del capitalismo, pero estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, e hizo lo posible para mejorar sus relaciones con Washington. Por presión de Perón, y venciendo las reticencias de muchos antiguos nacionalistas que lo habían acompañado, el Congreso aprobó en 1946 las Actas de Chapultepec, que permitían el reingreso a la comunidad internacional, y al año siguiente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río. En el mismo lugar donde, cinco años antes, el país manifestara plenamente su independencia diplomática, el canciller Juan Atilio Bramuglia se limitó en la ocasión a plantear diferencias menores. Pero la hostilidad estadounidense, alimentada por viejas razones económicas -la competencia de los granjeros- y motivos políticos más recientes, no disminuyó, y Estados Unidos siguió dispuesto a hacer pagar a la Argentina por su independencia durante la guerra. El boicot fue sistemático. El bloqueo a armamentos e insumos vitales no pudo mantenerse en la posguerra, salvo en algunos casos, pero el comercio exterior era vulnerable. Las exportaciones industriales a los países limítrofes, que habían crecido mucho durante la guerra,

empezaron a retroceder ante la competencia estadounidense. Las exportaciones agrícolas a Europa -que entraba a la paz literalmente hambrienta- fueron obstaculizadas por Estados Unidos, restringiendo los transportes o vendiendo a precios subsidiados. La apetencia de los países maltrechos por la guerra era demasiado grande para que esto impidiera las ventas, pero en rigor ninguno de ellos poseía ni productos para intercambiar ni divisas convertibles que el país pudiera usar para saldar sus compras en Estados Unidos, de modo que en estos años excepcionales la Argentina cosechó beneficios modestos. En 1948, se lanzó el Plan Marshall, pero Estados Unidos prohibió que los dólares aportados a Europa se usaran para importaciones de la Argentina. Ya desde 1949, las economías europeas se recuperaron, Estados Unidos inundó el mercado con cereales subsidiados y la participación argentina disminuyó drásticamente. Para el gobierno quedaba la esperanza de que una nueva guerra mundial restableciera la situación excepcional de principios de los años cuarenta, y en verdad no faltaban indicios en ese sentido, como la crisis de Berlín o la guerra de Corea, que estalló en 1950. El acotamiento del conflicto y la rápida respuesta de Estados Unidos para impedir una alteración del mercado mundial acabaron con la última esperanza.

Gran Bretaña no aceptó las presiones estadounidenses para restringir sus compras en la Argentina. Además de la carne, estaban en juego las libras argentinas bloqueadas en Londres durante la guerra y las inversiones británicas radicadas en el país. La magnitud de las deudas británicas -la Argentina era sólo un acreedor menor- hacía impensable el pago de las libras. La pésima situación de las empresas ferroviarias, la descapitalización y obsolescencia y la pérdida general de rentabilidad hacían conveniente para los británicos desprenderse de ellas. Luego de una larga y compleja negociación, se arregló la compra de los ferrocarriles por un valor

similar a las libras bloqueadas y un acuerdo sobre venta de carne, que sería en lo sucesivo pagada en libras convertibles. Tras la retórica nacionalista que envolvió esta operación -presentada como parte del programa de independencia económica y celebrada con una gran manifestación en la Plaza de Mayo- se trataba sin duda de un éxito británico, frente a un país que no tenía mejor opción. La crisis financiera británica de 1947 y el abandono de la convertibilidad de la libra acabaron con la única ventaja importante obtenida.

Vender cereales fue cada vez más difícil y vender carne, cada vez menos interesante. La consecuencia fue una reducción de la producción agropecuaria -motivada también por otros aspectos de la política económica- que se acompañó de un crecimiento sustantivo de la parte destinada al consumo interno. El lugar en el mundo que tradicionalmente tenía la Argentina, como productor privilegiado de bienes agropecuarios, fue haciéndose menos significativo y esto contribuyó a definir las opciones -económicas y políticas- que la guerra había planteado.

La Segunda Guerra Mundial, la crisis de los mercados y el aislamiento, acentuado por el boicot estadounidense, habían contribuido a profundizar el proceso de sustitución de importaciones iniciado en la década anterior, que, extendiéndose más allá de los límites considerados “naturales” -la elaboración de materias primas locales-, avanzó en el sector metalúrgico y otros. Una empresa típica, Siam Di Telia, que había comenzado elaborando máquinas de amasar y surtidores para Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), creció notablemente con las heladeras, a las que después sumó ventiladores, planchas y lavarropas. En algunos casos se exportó a países vecinos, que también padecían la falta de los suministros habituales; en otros, se fabricaron localmente los productos importados ausentes: se adaptaron los

modelos y los procedimientos, con ingenio y quizá de manera improvisada y poco eficiente, y se usó intensivamente la mano de obra, lo que sumado a las dificultades para incorporar maquinarias hizo que los aumentos de producción implicaran caídas en la productividad laboral. Creció así, junto a las empresas industriales tradicionales, una amplia capa de establecimientos medianos y pequeños, y aumentó en forma notable la mano de obra industrial, que se nutría de la corriente de migrantes internos, cada vez más intensa.

El fin de la guerra y la conclusión de esa suerte de “vacío de poder” en el mundo, que había permitido el crecimiento de sectores industriales marginales como el argentino, planteaban distintas opciones. Abandonada definitivamente la idea de una vuelta a la “normalidad” previa a 1930 o a 1914, quienes estaban vinculados con los grupos empresarios más tradicionales, ubicados tanto en el sector exportador como en el industrial, adoptaban las ideas planteadas por Pinedo en 1940: estimular las industrias “naturales”, capaces de producir eficientemente y de competir en los mercados externos, asociarse con Estados Unidos para sustentar su crecimiento, y a la vez mantener un equilibrio entre el sector industrial y el agropecuario, del cual debían seguir saliendo las divisas necesarias para la industria. La opción era difícil, no sólo por la necesidad de recomponer una relación con Estados Unidos que estaba muy deteriorada, así como de procurar firmemente recuperar los mercados de los productos agropecuarios, sino porque suponía una fuerte depuración del sector industrial, eliminar el segmento menos eficiente crecido durante la guerra al amparo de la protección natural que ésta generaba y afrontar a la vez los costos de una difícil absorción de la mano de obra que quedaría desocupada. Una segunda alternativa había sido planteada por grupos de militares durante la guerra, y recogía tanto motivos estratégicos de

las Fuerzas Armadas como ideas que arraigaban en el nacionalismo: profundizar la sustitución, extenderla a la producción de insumos básicos, como el acero o el petróleo, mediante una decidida intervención del Estado, y asegurar así la autarquía. La imagen de la Unión Soviética -que, más allá del comunismo, se había convertido en un Estado poderoso- estaba presente en esta propuesta, y en la subsecuente retórica de los planes quinquenales. Pero, igual que en la Unión Soviética, esto implicaba un enorme esfuerzo para la capitalización, restricciones al consumo y probablemente una “generación sacrificada”.

Perón venía participando de estas discusiones, que él mismo promovió en el Consejo de Posguerra constituido en 1944. Su solución fue ecléctica y también novedosa, y tuvo en cuenta principalmente los intereses inmediatos de los trabajadores, que constituían su apoyo más sólido. La inspiración autárquica de los militares se dibuja en el Primer Plan Quinquenal, que debía servir para planificar la economía, pero se limitó a una serie de vagos enunciados, y también en la constitución de la empresa siderúrgica estatal Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), que sin embargo todavía seguiría casi en proyecto diez años después. La presencia del sector industrial crecido en la guerra se advierte en su primer equipo económico, a cuya cabeza estaba Miguel Miranda, un fabricante de envases de hojalata, secundado por Raúl Lagomarsino, un industrial del vestido, y asesorado por José Figuerola, un destacado técnico español. Miranda, nombrado presidente del Banco Central, del poderoso Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPi) y del Consejo Económico Social, fue durante tres años el conductor de la economía. La política del Estado -dotado como se verá de instrumentos mucho más poderosos- apuntó a la defensa del sector industrial instalado y a su expansión dentro de las pautas vigentes de protección y facilidad. Éste recibió amplios

créditos del Banco Industrial, protección aduanera para eliminar competidores externos y divisas adquiridas a tipos preferenciales para equiparse. Además, las políticas de redistribución de ingresos hacia los sectores trabajadores contribuían a la expansión sostenida del consumo. En ese singular período, la alta ocupación y los salarios en alza trajeron aparejada una expansión de la demanda y una inflación cuyos niveles empezaron a elevarse, pero a la vez ganancias importantes para los empresarios.

En suma, Perón había optado por el mercado interno y por la defensa del pleno empleo. Se trataba de una verdadera “cadena de la felicidad”, que pudo financiarse principalmente por la existencia de una abundante reserva de divisas, acumulada durante los prósperos años de la guerra, y que permitió en la posguerra un acelerado, desenfrenado y con frecuencia poco eficiente equipamiento industrial. Desafiando las leyes de la contabilidad, y con la esperanza puesta en una nueva guerra mundial, en esos años se gastó en el exterior mucho más de lo que entraba. Por otra parte, el IAPI monopolizó el comercio exterior y transfirió al sector industrial y urbano ingresos provenientes del campo, mediante la diferencia entre los precios pagados a los productores y los obtenidos por la venta de las cosechas en el exterior. Era un golpe fuerte al sector agropecuario, al que sin duda ya no se consideraba la “rueda maestra” de la economía, o al que quizá se suponía capaz de soportarlo todo. Los productores rurales padecían también por la falta de insumos y maquinarias -para las que no había cambio preferencial-, el congelamiento de los arrendamientos, que afectó el ciclo natural de recuperación de la fertilidad de la tierra, y el costo más alto de la mano de obra, debido a la vigencia del Estatuto del Peón. Todas estas razones agudizaron la caída de la superficie cultivada, al tiempo que el aumento del consumo interno -reflejado en el trigo, y sobre todo en la carne- reducía aún más las

disponibilidades para la exportación.

La política peronista se caracterizó por un fuerte impulso a la participación del Estado en la dirección y regulación de la economía; desarrolló tendencias iniciadas en la década anterior, bajo las administraciones conservadoras, pero las extendió y profundizó, según una corriente de inspiración keynesiana difundida en muchas partes durante la posguerra. A la vez, hubo una generalizada nacionalización de las inversiones extranjeras, particularmente de empresas controladas por capital británico, que se hallaba en pleno proceso de repatriación; se adjudicó a esto una gran importancia simbólica, expresada en la fórmula de la Independencia Económica, solemnemente proclamada en Tucumán el 9 de julio de 1947. A los ferrocarriles se sumaron los teléfonos, la empresa de gas y algunas compañías de electricidad del interior, sin afectar sin embargo a la legendaria Compañía Argentina de Electricidad (CADE) que servía a la Capital. Se dio fuerte impulso a Gas del Estado, construyendo el gasoducto desde Comodoro Rivadavia, a la Flota Mercante -a la que se incorporaron las naves del extenso grupo Doderó- y a la incipiente Aerolíneas Argentinas. El Estado avanzó incluso en actividades industriales, no sólo por la vía de las fábricas militares, sino con un grupo de empresas alemanas nacionalizadas, que integraron la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE). Pero la reforma más importante fue la nacionalización del Banco Central. Desde él se manejaba la política monetaria y la crediticia, y también el comercio exterior, pues los depósitos de todos los bancos fueron nacionalizados, y al Banco Central se le asignó el control del IAPI.

Así, la nacionalización de la economía y su control por el Estado fueron una de las claves de la nueva política económica. La otra -y quizá la primera- tuvo que ver con los trabajadores, con el mantenimiento del empleo y con la elevación de su nivel de vida.

Esto tenía probablemente raíces políticas más importantes que las económicas: el terror a las posibles consecuencias sociales del desempleo, el recuerdo de la crisis de la primera posguerra -de la que Perón mismo tuvo una experiencia directa, cuando participó en la represión de los amotinados de Vasena-, así como la misma experiencia europea de entreguerras, y también de posguerra, deben haber influido no sólo en el diseño político más general, sino en el privilegio, en materia de política económica, de la salvaguardia del empleo industrial primero y de la redistribución de los ingresos después. Pero a la vez, la justicia social sirvió para el sostenimiento del mercado interno. Entre 1946 y 1949 se extendieron y generalizaron las medidas sociales lanzadas antes de 1945. Por la vía de las negociaciones colectivas, garantizadas por la ley, los salarios empezaron a subir notablemente. A ello se agregaron las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o los sistemas sociales de medicina y de turismo, actividades en las que los sindicatos tuvieron un importante papel. Por otros caminos, el Estado benefactor contribuyó decisivamente a la elevación del nivel de vida: congelamiento de los alquileres, establecimiento de salarios mínimos y de precios máximos, mejora de la salud pública -la acción del ministro Ramón Carrillo fue fundamental-, planes de vivienda, construcción de escuelas y colegios, organización del sistema jubilatorio, y en general todo lo relativo al campo de la seguridad social.

EL ESTADO PERONISTA

Esta combinación de lo conseguido y lo concedido es reveladora de la compleja relación establecida entre los trabajadores y el Estado. Los términos en que ésta se había desarrollado hasta las elecciones enseguida se modificaron radicalmente después del triunfo.

Justificándose en la innumerable cantidad de conflictos entre laboristas y radicales renovadores, Perón ordenó la disolución de los distintos nucleamientos que lo habían apoyado, y entre ellos el Partido Laborista, a través del cual los viejos sindicalistas aspiraban a conducir una acción política autónoma, solidaria con Perón pero independiente. La decisión -que culminaría en la creación del Partido Peronista- fue al principio resistida, pero en definitiva sólo Cipriano Reyes, el dirigente de los frigoríficos de Berisso, se enfrentó con Perón, ganándose una enconada persecución. Poco después, en enero de 1947, Perón eliminó de la dirección de la CGT a Luis Gay, veterano gremialista e inspirador del Partido Laborista, y uno de los propulsores del proyecto autónomo, y lo reemplazó por un dirigente de menor cuantía, indicando así la voluntad de subordinar al Estado la cúpula del movimiento obrero. Una vez más, no hubo resistencias: probablemente para el grueso de los trabajadores la solidaridad con quien había hecho realidad tantos beneficios importaba más que una autonomía política cuyos propósitos, en ese contexto, no resultaban claros.

Pero a la vez, la organización obrera se consolidó firmemente. Como ha mostrado Louise Doyon, la sindicalización, escasa hasta 1943, se extendió rápido a los gremios industriales primero y a los empleados del Estado después, alcanzando su máximo hacia 1950. La ley de asociaciones profesionales aseguraba la existencia de grandes y poderosas organizaciones -un sindicato por rama de industria y una confederación única-, con fuerza para negociar de igual a igual con los representantes patronales, pero a la vez dependientes de la “personería gremial”, otorgada por el Estado. Las orientaciones y demandas circulaban preferentemente desde arriba hacia abajo, y la CGT, conducida por personajes mediocres, fue la responsable de transmitir las directivas del Estado a los sindicatos y de controlar a los díscolos. Similar fue la función de los sindicatos

respecto de las organizaciones de base: controlar, achicar el espacio de acción autónoma, intervenir las secciones demasiado inquietas; a la vez, se hicieron cargo de funciones cada vez más complejas, tanto en la negociación de los convenios como en las actividades sociales, y debieron desarrollar una administración especializada, de modo que la fisonomía de los dirigentes sindicales, convertidos en una burocracia estable, se diferenció notablemente de la de los viejos luchadores. En la base, la acción sindical conservó una gran vitalidad, por obra de las comisiones internas de fábrica, que se ocuparon de infinidad de problemas inmediatos referidos a las condiciones de trabajo, negociaron directamente con patronos y gerentes, y establecieron en la fábrica un principio bastante real de igualdad. En los primeros años, hasta 1949, las huelgas fueron numerosas, y se generaron al impulso de las reformas lanzadas desde el gobierno, para hacerlas cumplir o extenderlas, con la convicción por parte de los trabajadores de que se ajustaban a la voluntad profunda de Perón.

Éste, sin embargo, se preocupaba por esa agitación sin fin y procuraba profundizar el control del movimiento sindical. Los gremialistas que lo acompañaron en el inicio fueron alejándose, reemplazados por otros elegidos por el gobierno y más proclives a acatar sus indicaciones. Las huelgas fueron consideradas inconvenientes al principio, y francamente negativas luego: se procuró solucionar los conflictos mediante los mecanismos del arbitraje, y en su defecto se optó por reprimirlos, ya sea por mano del propio sindicato o de la fuerza pública. Desde 1947, Eva Perón, esposa del presidente, se dedicó desde la Secretaría de Trabajo -el lugar dejado vacante por Perón- a cumplir las funciones de mediación entre los dirigentes sindicales y el gobierno, facilitando la negociación de los conflictos con un estilo muy personal que combinaba la persuasión y la imposición.

La relación entre Perón y el sindicalismo -crucial en el Estado peronista- fue sin duda compleja, negociada y difícilmente reducible a una fórmula simple. Pese a la fuerte presión del gobierno sobre los sindicatos y a la decisión de controlar su acción, éstos nunca dejaron de ser la expresión social y política de los trabajadores. Desde la perspectiva de éstos, el Estado no sólo facilitaba y estimulaba su organización y los colmaba de beneficios, sino que creaba una situación de comunicación y participación fluida y hasta familiar, de modo que estaban lejos de considerarlo como algo ajeno. El Estado peronista, a su vez, tenía en los trabajadores su gran fuerza legitimadora, y los reconocía como tal; y no de un modo retórico o abstracto, sino referido a sus organizaciones y a sus dirigentes, a quienes concedió un lugar destacado.

Pero a la vez, el Estado peronista procuró extender sus apoyos a la amplia franja de sectores populares no sindicalizados, con quienes estableció una comunicación profunda, aunque de índole diferente, a través de Eva Perón y de la fundación que llevó su nombre. Financiada con fondos públicos y aportes privados más o menos voluntarios, la Fundación realizó una obra de notable magnitud: creó escuelas, hogares para ancianos o huérfanos y policlínicos; repartió alimentos y regalos navideños; estimuló el turismo y los deportes, a través de campeonatos infantiles o juveniles de dimensión nacional, bautizados con los nombres de la pareja gobernante. Sobre todo, practicó la acción directa: las unidades básicas -organizaciones celulares del partido- detectaban los casos particulares de desprotección y transmitían los pedidos a la Fundación, donde, por otra parte, la propia Eva Perón recibía cotidianamente, sin fatiga, una permanente caravana de solicitantes que obtenían una máquina de coser, una cama en el hospital, una bicicleta, un empleo o una pensión quizá, un consuelo siempre. Eva

Perón resultaba así la encarnación del Estado benefactor y providente, que a través de la “Dama de la Esperanza” adquiría una dimensión personal y sensible. Sus beneficiarios no eran exactamente lo mismo que los trabajadores: muchos carecían de la protección de sus sindicatos, y todo lo debían al Estado y a su intercesora. Los medios de difusión machacaron sin cesar sobre esta imagen, entre benefactora y reparadora, replicada luego por la escuela, donde los niños se introducían a la lectura con “Evita me ama”. La experiencia de la acción social directa, sumada al reiterado discurso del Estado, terminaron constituyendo una nueva identidad social, los “humildes”, que completó el arco popular de apoyo al gobierno.

Según una concepción que se desarrolló más ampliamente a medida que transcurrían los años, el Estado debía vincularse con cada uno de los sectores de la sociedad, que era considerada como una comunidad y no como la suma de individuos, y aspiraba a que cada uno de ellos se organizara y constituyera su representación corporativa. Con mayor o menor fortuna, aspiró a organizar a los empresarios, reuniendo en la Confederación General Económica (CGE) a todas las representaciones sectoriales, así como a los estudiantes universitarios o a los profesionales. Intentó también, con cautela, redefinir las relaciones con las grandes corporaciones tradicionales. Con la Iglesia existió un acuerdo básico, que se tradujo en el poco velado apoyo electoral de 1946. El gobierno peronista mantuvo la enseñanza religiosa en las escuelas, y concedió la conducción de las universidades a personajes vinculados con el clericalismo hispanófilo. Reservó un lugar importante en el ceremonial público a los altos prelados, como monseñor Santiago Copello, e incorporó a su elenco político a algunos sacerdotes, como el padre Hernán Benítez, confesor de Eva Perón, o el padre Virgilio Filippo, fogoso cura párroco del barrio de Belgrano, que cambió el

púlpito por una banca en el Congreso. Fue sin embargo una relación algo distante: un grupo importante de eclesiásticos -entre ellos, monseñor Miguel D'Andrea-, preocupados por el autoritarismo creciente, se alineó firmemente en el lado de los opositores; otros lamentaron la renuncia de Perón a las consignas nacionalistas, y otros muchos miraron con reservas algunos aspectos de la política democratizadora de las relaciones sociales, como por ejemplo la igualación de derechos entre hijos “naturales” y “legítimos”.

Con respecto a las Fuerzas Armadas, aunque Perón recurrió de manera habitual a oficiales para desempeñar funciones de importancia, se cuidó inicialmente tanto de inmiscuirse en su vida interna como de darles cabida institucional en el gobierno. Sobre todo, procuró conservar la identificación establecida en 1943 entre las Fuerzas Armadas y un gobierno del que se quería continuador: el 4 de junio, “olímpico episodio de la historia”, siguió siendo un Fausto fundador; temas centrales del gobierno, como la independencia económica, la unidad nacional y el orden, y sobre todo la imagen de un mundo en guerra donde la neutralidad se traducía en la “tercera posición”, sirvieron para consolidar un campo de solidaridades común, alterado sin embargo por el estilo excesivamente plebeyo que los militares veían en el gobierno, y sobre todo por la presencia, acción y palabra, difíciles de aceptar, de la esposa del presidente.

Según la concepción de Perón, el Estado, además de dirigir la economía y velar por la seguridad del pueblo, debía ser el ámbito donde los distintos intereses sociales, previamente organizados, negociaran y dirimieran sus conflictos. Esta línea -ya esbozada en la década de 1930- se inspiraba en modelos muy difundidos por entonces, que pueden filiarse tanto en Benito Mussolini como en el mexicano Lázaro Cárdenas, y rompía con la concepción liberal del

Estado. Implicaba una reestructuración de las instituciones republicanas, una desvalorización de los espacios democráticos y representativos y una subordinación de los poderes constitucionales al Ejecutivo, lugar donde se asentaba el conductor, cuya legitimidad derivaba menos de esas instituciones que del plebiscito popular.

Paradójicamente, un gobierno surgido de una de las escasas elecciones inobjetables que hubo en el país recorrió con decisión el camino hacia el autoritarismo. Así, en 1947 reemplazó a la Corte Suprema mediante un juicio político escasamente convincente. Utilizó con amplitud el recurso de intervenir las provincias; en muchos casos -en Santa Fe, Catamarca, Córdoba, entre otros-, y en la mejor tradición argentina, lo hizo para resolver cuestiones entre sectores de su heterogénea cohorte de apoyos. Pero en un caso, en Corrientes, y sin que mediara conflicto alguno, lo usó para deponer al único gobernador no peronista elegido en 1946. Una ley acabó en 1947 con la autonomía universitaria, estableciendo que toda designación docente requería de un decreto del Ejecutivo. El Poder Legislativo fue formalmente respetado -el *Corpus* legislativo elaborado en esos años fue abundante-, pero se lo vació de todo contenido real: los proyectos se preparaban en oficinas de la presidencia, y se aprobaban sin modificaciones; los opositores fueron acusados de desacato, excluidos de la Cámara o desaforados, como ocurrió en 1949 con Ricardo Balbín, y la discusión parlamentaria fue eludida recurriendo al “cierre del debate”, especialidad del diputado José Astorgano. En 1951, una modificación del sistema de circunscripciones electorales - diagramado por Román Subiza, secretario de Asuntos Políticos- redujo al mínimo la representación opositora en la Cámara de Diputados. El avance del Ejecutivo llegó también al “cuarto poder”: con recursos diversos, el gobierno formó una importante cadena de diarios y otra de radios, que condujo desde la Secretaría de Prensa y

Difusión, administrada por Raúl Alejandro Apold, a quien la oposición solía comparar con el doctor Goebbels. Los diarios independientes fueron presionados de mil maneras: cuotas de papel, restricciones a la circulación, clausuras temporarias, atentados, y en dos casos extremos -*La Prensa* y *La Nueva Provincia*, en 1951- la expropiación. La reforma de la Constitución, realizada en 1949, acabó con la última y gran salvaguardia institucional al autoritarismo y estableció la posibilidad de la reelección presidencial. Dos años después, en noviembre de 1951, Juan Domingo Perón y Juan Hortensio Quijano fueron reelectos, obteniendo en la ocasión -cuando votaron por primera vez las mujeres- alrededor de las dos terceras partes de los sufragios.

Para Perón, tan importante como afirmar la preeminencia del Ejecutivo sobre el resto de las instituciones republicanas fue dar forma al heterogéneo conjunto de fuerzas que lo apoyaba, proveniente de diferentes sectores, con tradiciones diversas, y muchas veces nutrido de cuadros y militantes sin experiencia ni formación política. A todo ello había que darle un disciplinamiento y una organización acordes con los principios políticos más generales del peronismo, y además evitar tanto los conflictos internos como la posibilidad de que encarnaran y transmitieran tensiones y demandas desde la base de la sociedad. Para ello recurrió a un método muy tradicional, ya practicado por Roca, Yrigoyen y Justo: el uso de la autoridad del Estado para disciplinar las fuerzas propias, y uno novedoso, la utilización de su liderazgo personal e intransferible -compartido con su esposa-, que se constituyó de manera natural, pero que luego fue cuidadosamente alimentado por la maquinaria propagandística. En el Congreso, Perón exigió de cada diputado o senador una renuncia en blanco, como garantía de su disciplina. El Partido Peronista, creado en 1947, adoptó una organización totalmente vertical, donde cada

escalón se subordinaba a la decisión del nivel superior, hasta culminar en el líder, presidente del país y del partido, con derecho a modificar cualquier decisión partidaria. Se trataba de una versión local del célebre *Führerprinzip* alemán, pero su aplicación fue menos dramática: el Partido -manejado por el almirante Alberto Teisaire- se limitó a organizar las candidaturas, y Perón, a arbitrar en los casos difíciles o a mencionar simplemente quiénes debían ser electos. La organización se modificó varias veces y, como mostró Alberto Ciria, los organigramas, cada vez más complejos, acentuaron la verticalidad. Finalmente, el Partido fue incluido dentro del movimiento, junto con el Partido Peronista Femenino -que organizó Eva Perón- y la CGT, a las órdenes del jefe supremo, a quien se subordinaban el Comando Estratégico y los Comandos Tácticos.

Además de esta terminología militar, la organización incluía un elemento revelador: en cada nivel se integraba la autoridad pública ejecutiva respectiva -intendente, gobernador o presidente-, con lo cual quedaba claro, y puesto por escrito, que movimiento y nación eran considerados una misma cosa. Lo que inicialmente fue la doctrina peronista se convirtió en la Doctrina Nacional, consagrada en esos términos por la Constitución de 1949, que articulaba tanto al Estado como a la comunidad organizada. Estado y movimiento, movimiento y comunidad confluían en el líder, quien formulaba la doctrina y la ejecutaba, de manera elástica y pragmática, con su arte de conductor que, aunque personal e intransferible, podía ser enseñado a quienes asumieran los comandos subordinados. Se combinaban aquí las tradiciones del Ejército, donde la conducción es un capítulo fundamental del mando, y la de los modernos totalitarismos, que, en su versión fascista, sin duda impresionaron a Perón.

Esta retórica era indudablemente ajena a la tradición política

principal del país, liberal y democrática, aunque su emergencia no puede resultar del todo extraña si se recuerda lo que fueron anteriormente las prácticas concretas: ni la identificación del partido con la nación, ni la marginación del Congreso, ni la identificación entre el jefe del Estado y el jefe del partido oficial eran novedades absolutas. Por otra parte, si el peronismo segó sistemáticamente los ámbitos de participación autónoma, ya fueran éstos partidarios, sindicales o civiles, y tuvo una tendencia a penetrar y “peronizar” cualquier espacio de la sociedad civil, no es menos cierto que encarnó y concretó un vigorosísimo movimiento democratizador, que aseguró los derechos políticos y sociales de vastos sectores hasta entonces al margen, y culminó con el establecimiento del voto femenino y la instrumentación de medidas concretas para asegurar a la mujer un lugar en las instituciones. Los conceptos más tradicionales de democracia no alcanzan a dar cuenta de esta forma, muy moderna, de democracia de masas.

Esta singular forma de democracia se constituía desde el Estado. Los diversos actores que conformaban su base de sustentación eran considerados como “masas”, es decir, un todo indiferenciado, cuya expresión autónoma o específica no era valiosa, y que debía ser moldeado, inculcándole la “doctrina”. A ello se dirigía la propaganda masiva, que saturaba los medios de comunicación - utilizados por primera vez en forma sistemática- y también la escuela. El régimen tuvo una tendencia definida a “peronizar” todas las instituciones y a convertirlas en instrumentos de adoctrinamiento. Sería difícil dudar de la eficacia de estos mecanismos, que se traducían en un sufragio masivo en favor de Perón o de los candidatos por él indicados.

Pero la forma más característica y singular de la política de masas eran las movilizaciones y las concentraciones. Realizadas en días fijos -1º de Mayo, 17 de octubre- y en ocasiones especiales -

cuando había que celebrar algo o ratificar alguna decisión política-, conservaban mucho del *pathos* desafiante, espontáneo y contestatario de la movilización fundadora del peronismo, pero ritualizado y atemperado, más en memoria y potencia que en acto. Ya no eran espontáneas sino convocadas, con suministro de medios de transporte; ordenadas y encuadradas, y hasta incluyeron controles de asistencia. Sobre todo, eran jornadas festivas, despojadas de elementos de enfrentamiento real, salvo con la metafórica “oligarquía” o “antipatria”, que expresaban antes la unidad de la nación que de sus conflictos: en la “fiesta del trabajo” - según el inspirado verbo de Oscar Ivanissevich, ministro de Educación y vate oficial-, los trabajadores, “unidos por el amor de Dios”, se reunían “al pie de la bandera sacrosanta”. En rigor, este proceso no era nuevo y la lenta transición de la jornada combativa a la festiva se inició en la década de 1920. En rigor también, la tradición contestataria era recordada y mantenida tanto por Perón como, sobre todo, en las palabras ásperas, llenas de furor plebeyo y desafío clasista de Eva Perón.

Al renovar el pacto fundador entre el líder y el pueblo, las grandes concentraciones cumplían un papel fundamental en la legitimación plebiscitaria del régimen, que era considerada mucho más importante que la electoral. Además, eran el momento privilegiado en la constitución de una identidad, que resultaba tanto trabajadora y popular como peronista. Todo preparaba el momento privilegiado de la recepción del discurso del líder, quien, al apelar desde el “balcón” a los “compañeros”, incluía tanto una definición de su lugar, más allá de las pasiones y de los conflictos, como del de quienes lo apoyaban y aceptaban su dirección -la patria, el pueblo, los trabajadores-, y de los enemigos, calificados como la antipatria y, como tales, excluidos del sistema de convivencia, pues “a los enemigos, ni justicia”. Silvia Sigal y Eliseo Verón han señalado la

incorporación definitiva a la cultura política popular de dos elementos difícilmente asimilables a la tradición democrática más clásica: la verticalidad y el faccionalismo, convertidos desde entonces en valores políticos.

¿Hasta qué punto esto fue responsabilidad exclusiva del peronismo? La oposición terminó ocupando el lugar asignado en este sistema. La derrota de 1946 desarticuló totalmente el proyecto de la Unión Democrática -última figuración del Frente Popular- y confrontó a los partidos opositores con una cuestión difícil: desde dónde enfrentar a Perón. Los socialistas, apartados de toda representación política, mantuvieron su caracterización de “nazifascismo”, denunciaron los avances hacia el autoritarismo y consideraron que la prioridad era acabar con el régimen; los grupos de socialistas que intentaban una postura más comprensiva hacia los trabajadores que habían adherido al peronismo no lograron quebrar la sólida y ya anquilosada estructura partidaria. Algo similar ocurrió en el Partido Comunista: hubo un período de acercamiento y simpática comprensión, por la vía de las organizaciones de trabajadores, que culminó con la expulsión de los dirigentes que la propiciaron. Los conservadores sufrieron el cimbronazo de una cantidad de dirigentes que se “pasaron”, pero finalmente el antiguo frente se reconstituyó en una línea de oposición frontal, fundada en la defensa de la legalidad republicana.

En el radicalismo, el proceso fue más amplio. La derrota de 1946 abrió el camino a la renovación partidaria y una coalición de intransigentes renovadores y sabattinistas, críticos de la estrategia de la Unión Democrática, desplazó a los “unionistas” que venían del tronco alvearista. En 1947, en la Convención de Avellaneda, el Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR) había formulado sus principios, que transformaban sustancialmente el programa radical, hasta entonces ambiguo e impreciso. El MIR, sin renunciar a

la defensa de la Constitución y de la república, combatió al peronismo desde una posición que se presentaba como más progresista, tanto en lo social como en lo nacional, y lo hizo con más soltura a medida que el régimen, por las exigencias del gobierno, fue abandonando sus posiciones iniciales más avanzadas. Mientras el grupo unionista optaba por el desafío frontal y especulaba con un golpe militar, los intransigentes discutieron en el Congreso cada uno de los proyectos gubernamentales, coincidieron a veces y señalaron objeciones fundadas y atendibles en muchos casos. En el grupo de los 44 diputados, presidido por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, se formó toda la dirigencia radical posperonista. Pero no llegaron a constituirse en una verdadera oposición democrática, en parte porque entre muchos de ellos el faccionalismo era también muy fuerte, pero sobre todo porque la mayoría peronista no estaba dispuesta a convertir al Congreso en un lugar de debate, e incluso a tolerar que fuera una tribuna de los disidentes con la Doctrina Nacional. Todos los recursos se usaron para acallar sus voces y, finalmente, para ubicarlos en la posición que se les había asignado con anterioridad.

UN CONFLICTO CULTURAL

La virulencia del discurso político y, sobre todo, los encendidos ataques a la “oligarquía” no se correspondían con una conflictividad social real ni mucho menos con una guerra social, como parecía desprenderse de aquéllos. El régimen peronista no atacó ningún interés fundamental de las clases altas tradicionales, aunque algunos segmentos de ellas pudieran verse afectados por la política agropecuaria. Las instituciones que expresaban los intereses corporativos de los propietarios -la Sociedad Rural, la Unión Industrial y otras- no se opusieron públicamente al gobierno, e

incluso aceptaron discretas cooptaciones. Hubo, sí, nuevas incorporaciones de empresarios exitosos, y sobre todo de quienes supieron aprovechar vinculaciones y prebendas para hacer jugosos negocios. En el imaginario social ocupó un lugar importante el “nuevo rico”, el *parvenú*, que se mezcló con otros nuevos integrantes de una elite dirigente que, ciertamente, era mucho más variada que la anterior a 1945: los sindicalistas ocuparon puestos visibles, junto con una nueva camada de políticos, deportistas o artistas. Las clases medias tradicionales tuvieron quizá más motivos de queja, en especial quienes gozaban de rentas fijas, reducidas por la inflación, o quienes perdieron sus empleos estatales. Pero en cambio se nutrieron de nuevos y vigorosos contingentes llegados por las vías más tradicionales de la sociedad argentina: la modesta prosperidad económica de los trabajadores y la educación de sus hijos, pues una de las características salientes de estos años fue la formidable expansión de la matrícula en la enseñanza media y la no menos notable expansión de la universitaria.

Las migraciones internas habían venido modificando en profundidad la fisonomía de los sectores populares. En ellas, la crisis de la agricultura pampeana operó de manera tan fuerte como la oferta de trabajo industrial, y estabilizada ésta, fue la mera atracción de la vida en las ciudades, que reflejaba los procesos de modernización y aparición de expectativas y aspiraciones nuevas, generalizadas por la radio y el cine. Durante los años finales de la década del treinta y el período de la guerra, predominaron los migrantes de las zonas pampeanas más cercanas y luego se incorporaron los provenientes del Interior tradicional, con quienes se construyó la imagen social del “cabecita negra”. Con ellos se expandieron los cinturones de las grandes ciudades -el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba-, donde se repitió una historia social ya conocida: el lote modesto, la casita precaria,

construida por partes -con la novedad de los planes sociales de vivienda- y el esfuerzo societario para urbanizar el lugar.

La novedad de esta historia, que prolongaba el secular proceso de expansión de la sociedad argentina, fue la brusca incorporación de los sectores populares a ámbitos visibles, antes vedados. Más allá de su significado político, el 17 de octubre fue simbólico precisamente por eso. Estimulados y protegidos por el Estado peronista, y aprovechando una holgura económica novedosa, los sectores populares se incorporaron al consumo, a la ciudad, a la política. Compraron ropas y calzados, y también radios o heladeras, y algunos las “motonetas” que el líder se encargaba de promocionar. Viajaron por el país, gracias a los planes de turismo social, y accedieron a los lugares de esparcimiento y diversión, aprovechando la generalización del sábado inglés y aun el asueto sabatino total para algunos de ellos. Se llenaron las canchas de fútbol, las plazas y los parques, el Parque Retiro y los lugares de baile -como La Enramada- donde la música folclórica recordaba la vieja identidad y facilitaba la asunción de la nueva. Sobre todo, fueron al cine, la gran diversión de aquellos años. Invadieron la ciudad, incluso el centro, y lo usaron todo. Ejercieron plenamente una ciudadanía social, que nació íntimamente fusionada con la política.

El reconocimiento de la existencia del pueblo trabajador y el ejercicio de nuevos derechos estuvieron asociados con la acción del Estado, y la justicia social fue una idea clave y constitutiva tanto del discurso del Estado -que derivó de ella la doctrina llamada “justicialista”- como de la nueva identidad social que se constituía. Los materiales de esta idea se habían ido conformando en las dos décadas anteriores, tanto por obra de las experiencias de los sectores populares como de diversas fuentes discursivas, del socialismo a la doctrina de la Iglesia. Todo ello había decantado en una percepción,

racional y emotiva a la vez, de las injusticias de la sociedad -manifiesta tanto en un discurso de Alfredo Palacios como en una película de Tita Merello-, unida a una acción racional para solucionar sus aspectos más visibles, para alcanzar mejoras, quizá modestas pero posibles e inmediatas, en las que el Estado benefactor tenía la responsabilidad principal y la propia organización de los interesados era relegada a una situación ancilar. Lo singular -ha subrayado con justeza José Luis Romero- fue la combinación de esta nueva concepción con aquella otra más espontánea y verdaderamente constitutiva de la sociedad argentina moderna: la ideología de la movilidad social. La acción del Estado no sustituía la clásica aventura individual del ascenso, sino que aportaba el empujón inicial, la eliminación de los obstáculos más gruesos, para que los mecanismos tradicionales pudieran empezar a funcionar. La justicia social venía a completar así el proceso secular de integración de la sociedad argentina, y la identidad que se constituyó en torno de ella fue a la vez obrera e integrativa. A diferencia de las décadas anteriores, todo lo referente al mundo del trabajo, y a la misma dignidad inherente a él, tuvo un significado central, reforzado por el papel de la institución obrera por excelencia -el sindicato- en innumerables ámbitos de la vida, laboral y no laboral, pues de la mano del sindicato los trabajadores aseguraron su salud tanto como accedieron al turismo o al deporte. Los trabajadores se integraron a la nación de la mano del Estado y a la vez se incorporaron a la sociedad establecida, de cuyos bienes acumulados aspiraban a disfrutar, con prácticas típicas ya desarrolladas por quienes, en épocas anteriores, habían seguido el mismo proceso de integración.

El Estado facilitó el acceso a dichos bienes. Al fuerte estímulo a la educación -particularmente en el nivel medio- se agregó la protección y promoción de las diversas actividades culturales: conciertos y representaciones teatrales a precios populares, apertura

del Teatro Colón a actividades más variadas, y una fuerte protección a la industria cinematográfica, que se sumaron al crecimiento natural de la radiofonía. El Estado distribuía, y el público recibía, junto con los bienes, una dosis masiva de propaganda. La mayoría de los diarios y todas las radios fueron manejados, directa o indirectamente, desde la Secretaría de Prensa y Difusión. El agudo Enrique Santos Discépolo o el mediocre Américo Barrios fueron las voces de una propaganda oficial que también desbordaba en los relatos deportivos de Luis Elías Sojit, y que finalmente se instaló en las escuelas, cuando *La razón de mi vida*, el libro de Eva Perón, fue establecido como texto obligatorio.

El Estado facilitaba el acceso a la cultura erudita, pero sobre todo distribuía cultura “popular”, que incluía mucho de lo folclórico tradicional -como lo podían expresar Antonio Tormo o Alberto Castillo- y mucho de comercial. Pero en conjunto, distribuía en el imaginario de la sociedad los modelos sociales y culturales establecidos, de la misma manera que, décadas antes, lo había hecho la revista *El Hogar*: eso es lo que se veía en el cine de los teléfonos blancos, con su imagen convencional de las clases tradicionales, tal como las podía encarnar Zully Moreno, o en los libros escolares, donde los trabajadores eran representados en su hogar, sentados en un sillón, con saco y corbata, y leyendo el diario. Distribuía también una cierta visión de la tradición nacional, manifiesta en la preocupación por develar el mítico ser nacional que debía unificar a la comunidad. Curiosamente, para este movimiento alguna vez surgido del nacionalismo, esa tradición se encarnaba en primer lugar en José de San Martín, el Libertador -el centenario de su muerte conmemorado con profusión-, que prefiguraba al segundo Libertador, y luego -conspicuamente ausente Rosas- en la más clásica tradición liberal, la de Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Julio Roca, con cuyos nombres fueron

bautizadas las líneas de los ferrocarriles nacionalizados. Ese momento fundacional se separaba del presente por un pasado negro y ominoso, de una densidad tal que el peronismo -sin perder su arraigo en la tradición- podía exhibir plenamente su dimensión fundadora y revolucionaria, legitimada en un futuro en construcción. Un pasado negro y un presente rosa, un antes y un ahora, eran los elementos centrales que organizaban los textos y los discursos peronistas.

Esa construcción discursiva, y la forma elegida de difundirla, no necesitaron tanto de verdaderos intelectuales como de mediadores un poco militantes y otro poco obsecuentes. Ciertamente, pese al apoyo disponible, la creación intelectual y artística fue escasa en el medio oficial, donde pueden recordarse pocas figuras notables: el filósofo Carlos Astrada, los escritores Leopoldo Marechal y María Granata, el poeta Horacio Rega Molina. Los mejores intelectuales y creadores críticos e innovadores convivieron, junto con los de la antigua cultura establecida y un poco caduca, en instituciones surgidas al margen del Estado, y animadas por un cierto fuego sagrado: Ver y Estimar, Amigos de la Música, el Colegio Libre de Estudios Superiores, que funcionó como universidad alternativa, y la revista *Sur*, donde el esteticismo cosmopolita y apolítico hacía las veces de una ideología opositora. Quizá lo más novedoso de estos años en materia de creación cultural haya sido el auge del teatro “independiente”, cultivado por artistas no profesionales, donde encontró terreno adecuado una renovada producción nacional -a partir de *El puente*, de Carlos Gorostiza, estrenada en 1949- que contrastó con la chatura repetitiva de los grandes teatros comerciales o estatales.

El peronismo había surgido, en los años de la guerra y la inmediata posguerra, en el marco de un fuerte conflicto social, alimentado desde el mismo Estado. Con el correr del tiempo,

derivó, por una parte, en un fuerte enfrentamiento político, que separaba al oficialismo de la oposición, y, por otra, en un conflicto que, más que social, era cultural. El Estado había trabajado mucho para encuadrar los conflictos sociales en una concepción más general de la armonía de clases, la comunidad de intereses y la negociación, que él arbitraba, y a la vez había desplazado el conflicto al campo del imaginario de la sociedad.

Fue un conflicto cultural, infinitamente más violento que el existente entre los intereses sociales básicos, el que opuso lo “oligárquico” con lo “popular”. Lo popular combinaba las dimensiones trabajadora e integrativa, y carecía de aquellos componentes clasistas que, en otras sociedades, se manifiestan en una cultura cerrada y centrada en sí misma. No se apoyó en un modelo cultural diferente del establecido, sino en una manera diferente y más amplia de apropiarse de él, de participar de algo juzgado valioso y ajeno. En esa perspectiva, la oligarquía -fría y egoísta- era la que pretendía restringir el acceso a esos bienes y excluir al pueblo. Se trataba de una definición precisa en cierto sentido, sobre todo ético, pero socialmente muy difusa, y permitía combinar un violento ataque discursivo -en particular, en la voz plebeya de Eva Perón- con escasas acciones concretas en contra de los supuestos destinatarios, la “oligarquía encerrada en sus madrigueras”. Inversamente, desde la oposición, la resistencia a las prácticas políticas del peronismo se combinaba con la irritación ante la forma peronista del proceso de democratización social: hubo en ellos mucho de reacción horrorizada frente a la invasión popular de los espacios antaño propios, y mucho de ira ante la pérdida de la deferencia y el respeto, que juzgaban producto de las medidas demagógicas del régimen. Su respuesta fue, junto con el ataque al régimen, la ridiculización del *parvenú*, tanto del nuevo rico como del humilde habitante urbano, incapaz de manejar con destreza los

instrumentos de la nueva cultura o de comprender sus claves, y a menudo encandilado con sus manifestaciones más superficiales.

Fueron dos configuraciones culturales antagónicas y excluyentes, que se negaron mutuamente pero que compitieron por la significación de un campo común. En torno de Eva Perón se libró un combate de ese tipo. Confrontaron dos versiones antagónicas e igualmente estilizadas, frente a las cuales el verdadero personaje se fue esfumando: como ha mostrado Julie Taylor, a la Dama de la Esperanza se contrapuso la Mujer del látigo, dos versiones de la misma imagen de la mujer y de sus funciones, elaborada por las clases medias, de la cual unos y otros pretendían apropiarse. Más visible aún fue la disputa en torno de la imagen de los “descamisados”, que en la práctica aludía al acto ritual de los dirigentes de sacarse el saco en las ceremonias oficiales, quizá para lucir sus camisas de seda. Originariamente, como el *sans-culotte* francés, encierra todo el prejuicioso desprecio de la gente “decente” frente a un comensal inesperado; pero del otro lado, en lugar de una imagen diferente que cambiara los términos del conflicto asumiendo la propia identidad obrera, hubo una asunción positiva del descamisado, una apropiación y resignificación de la imagen del otro, como si el conflicto cultural se librara en el campo ya organizado por los sectores tradicionales.

CRISIS Y NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA

La coyuntura externa favorable en la que surgió el Estado peronista comenzó a invertirse hacia 1949: los precios de los cereales y las carnes volvieron a su normalidad y los mercados se contrajeron, mientras que las reservas acumuladas, consumidas con poca previsión, se agotaron. La situación era grave, pues el desarrollo de la industria, quizá paradójicamente, hacía al país más dependiente

de sus importaciones: combustibles, bienes intermedios como acero o papel, repuestos y maquinarias, cuya falta dificultaba el desenvolvimiento de la industria y provocaba, finalmente, inflación, paro y desocupación. Los primeros signos de la crisis llevaron en 1949 a la caída de Miguel Miranda, reemplazado por un equipo de economistas profesionales -encabezado por Alfredo Gómez Morales- que se encargó de iniciar los ajustes. Las medidas no evitaron que, tres años después, la crisis del sector externo se repitiera, agravada por dos sequías sucesivas. En ese duro invierno de 1952, la gente debió consumir un pan negruzco, elaborado con mijo, faltó la carne y los cortes de luz fueron frecuentes. También en ese invierno murió Eva Perón, uno de los símbolos de la prosperidad perdida.

Precisamente en 1952 el gobierno adoptó con firmeza un nuevo rumbo económico, ratificado luego en el Segundo Plan Quinquenal, mucho más específico que el anterior, que debía tener vigencia entre 1953 y 1957. Para reducir la inflación, se restringió el consumo interno: fueron eliminados subsidios a distintos bienes de uso popular, se estableció una veda parcial al consumo de carne y se levantó el congelamiento de los alquileres; además, Perón hizo una apelación a la reducción voluntaria y consciente del consumo, de sorprendente efecto. Por otra parte, se proclamó la “vuelta al campo”: el IAPI, manejado por un “ministro liquidador”, invirtió su mecanismo y empezó a estimular a los productores rurales con precios retributivos, al tiempo que se daba prioridad a la importación de maquinaria agrícola. Esta política, cuyos efectos no llegaron a ser apreciables, apuntaba a aumentar la disponibilidad de divisas para seguir impulsando el desarrollo del sector industrial, clave para todo el andamiaje del peronismo.

Por entonces, el estancamiento industrial era evidente. En los años anteriores, y al amparo de una amplia política proteccionista,

había proliferado un extenso sector de medianos y pequeños establecimientos, en general muy poco eficientes, que subsistía de alguna manera al amparo de las grandes fábricas y de sus elevados precios. Las ramas de alimentos y de textiles, que encabezaran el crecimiento, habían llegado al límite de sus posibilidades de crecimiento. Otras ramas, como la metalúrgica, la de electrodomésticos, caucho, papel o petroquímica, tenían todavía amplias posibilidades en el mercado interno, pero se encontraban trabadas por diversas limitaciones. El principal problema del sector industrial era su reducida eficiencia, oculta por la protección y los subsidios que por distintas vías recibía del Estado. Las causas eran varias: a la maquinaria obsoleta se sumaba el deterioro de los servicios, particularmente la escasa electricidad y los deficientes transportes, sobre todo ferroviarios, cuya renovación el Estado había abandonado. En las fábricas, ausentes los incentivos que derivan de la competencia, habían subsistido procesos productivos ineficientes y costosos. Por último, la industria empleaba una alta proporción de mano de obra, y el peso de los salarios resultaba particularmente alto y difícil de reducir debido a la alta ocupación y a la fuerte capacidad sindical de negociación. La expansión de la demanda, que al principio compensaba los costos salariales altos, había perdido su efecto dinamizador, de modo que el problema comenzó a ser gravoso para los empresarios.

La nueva política económica apuntó a esos problemas. Se restringió el crédito industrial y el uso de las divisas, y se dio una nueva prioridad a las empresas grandes y sobre todo a las industrias de bienes de capital: el proyecto siderúrgico de SOMISA fue reactivado y se procuró iniciar la fabricación de tractores y automóviles. Los contratos colectivos de trabajo -piedra angular de la política sindical- fueron congelados por dos años. A principios de 1955, se convocó a empresarios y sindicalistas para discutir las

cuestiones de la productividad y afloraron los temas que preocupaban a aquéllos: la ineficiencia de la mano de obra, el poder excesivo de los delegados de fábrica, el ausentismo de los lunes. También afloró una sorda inquietud gremial, expresada en parte en la reivindicación de la política originaria del régimen y en parte en huelgas, como la metalúrgica de 1954, cuidadosamente acalladas por la disciplinada prensa oficial.

El gobierno puso sus mayores esperanzas en algo que desde entonces sería el tema central de las políticas económicas: la concurrencia de capitales extranjeros, que empezaron a ser imaginados por unos como la piedra filosofal y por otros como el caballo de Troya de la economía. En 1953, el gobierno sancionó una ley de radicación de capitales: pese a establecer importantes resguardos respecto de repatriación de utilidades o reenvío de ganancias, suponía una modificación fundamental respecto de los postulados de la independencia económica y la tercera posición. Esto ocurrió en el marco de una visible reconciliación con Estados Unidos, jalonada por el apoyo a su política en Corea y en Guatemala -donde en 1954 la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) derribó al presidente Árbenz-, y el entusiasta recibimiento al hermano del presidente Eisenhower. En el marco de esta política comenzaron a concretarse algunos proyectos, que madurarían plenamente luego de 1955: la FIAT italiana se interesó en tractores, autos y motores; otro grupo italiano inició una acería en Campana, la Mercedes Benz se radicó para fabricar camiones y la Kaiser instaló en Córdoba una planta de automóviles, ya obsoleta en Estados Unidos. Lo más importante fue el proyecto petrolero: en 1954, el gobierno firmó con una filial de la Standard Oil de California un contrato de explotación de 40 mil hectáreas en la provincia de Santa Cruz, con amplios derechos. Se trataba de una medida que desafiaba convicciones hondamente arraigadas -e

incluso una disposición de la Constitución de 1949- y que suscitó un amplio debate público, por lo que Perón prefirió enviarlo al Congreso para su ratificación. Allí fue discutido tanto por la oposición -Arturo Frondizi publicó por entonces *Petróleo y política*- como por sectores del propio peronismo, cuya voz más visible fue el joven diputado John William Cooke, y no llegó a ser ratificado.

Los logros de la nueva política económica fueron modestos: se redujo la inflación y se reequilibró la balanza de pagos, pero no se apreciaron cambios más sustanciales en el agro y en la industria. Ciertamente, esa política marcaba un rumbo nuevo, que en sus líneas básicas anticipaba la de los gobiernos posperonistas, pero su aplicación fue moderada y tuvo en cuenta la necesidad de resguardar la situación de los sectores populares, lo que en cierto sentido resultó poco compatible con la ortodoxia económica que la inspiraba: ni se recurrió a la devaluación -el gran instrumento con el que posteriormente se operaron rápidas y sustanciales transferencias de ingresos entre sectores- ni se redujo el gasto público, que en buena medida subsidiaba a los sectores asalariados. En ese sentido, esta nueva política económica se mantenía dentro de la tradición peronista.

Los comienzos de la crisis económica fueron acompañados de importantes manifestaciones de disconformidad entre dos de los principales apoyos del régimen, los sindicatos y el Ejército, cuya solución implicó un avance en el camino del autoritarismo. Hacia 1948, el Estado había logrado estabilizar y controlar el frente gremial, pero desde el año siguiente las huelgas, aunque menores en número, fueron más duras y con una veta crecientemente opositora. En 1949, en dos ocasiones fue la Federación Obrera Tucumana de la Industria del *Azúcar* (FOTIA), que nucleaba a los trabajadores azucareros de Tucumán; finalmente fue declarada ilegal y se

intervino el sindicato. Luego fueron los bancarios, los gráficos y los ferroviarios, a fines de 1950 y principios de 1951. Estas últimas constituyeron un fuerte desafío al régimen, por su visibilidad imposible de ignorar y porque ocurrieron al margen de la complaciente e ineficaz dirección del sindicato; los trabajadores, golpeados por la política de hacer menos costosos los ferrocarriles, siguieron a antiguos gremialistas opositores, y su voluntad ni siquiera pudo ser torcida por Eva Perón, que jugó su prestigio recorriendo patéticamente los talleres ferroviarios y reclamando a “sus” trabajadores solidaridad con Perón. Éste finalmente optó por aplicar una dura represión: prisión a los dirigentes rebeldes y movilización militar a los obreros.

Los problemas con los militares siguieron a un avance inicial del régimen sobre la institución, ante la que al principio había mantenido una cierta prescindencia. El general Franklin Lucero, nuevo ministro de Ejército, se preocupó de ganar apoyos entre los oficiales -creció el escalafón, los ascensos se agilizaron y hubo variadas prebendas para jefes y oficiales- y también entre los suboficiales, beneficiados con el derecho al voto -hasta entonces, una *capitis diminutio* los colocaba en el nivel de los irresponsables-, el uso de uniforme similar a los oficiales y un sistema de becas para educar a sus hijos, a lo que se agregó la posibilidad de “abrir los cuadros” y permitir su ascenso al cuerpo de oficiales. Todos estos beneficios, que suponían también el incremento de las rivalidades y las suspicacias internas, apuntaban a lograr un compromiso más pleno por parte de quienes debían ser un componente central de la comunidad organizada.

El compromiso solicitado puso en evidencia todas las reticencias y dudas que el régimen -no ya el presidente constitucional- suscitaba entre los militares. Se preguntaban acerca de la solidez de un orden proclamado, pero basado en la agitación popular

permanente; se indignaban ante avances flagrantes del autoritarismo, como la expropiación del diario *La Prensa*, y se irritaban sobre todo con Eva Perón, su injerencia en los asuntos del Estado y su peculiar estilo. La proclamación de su candidatura a la vicepresidencia, en el Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de agosto de 1951, a la que ella renunció días después, fue sin duda difícil de tolerar. Éstos y quizás otros motivos dieron el espacio mínimo para la acción de grupos de oficiales decididos a derribar a Perón, vinculados con aquellos políticos opositores embarcados ya en la misma ruta. El 28 de septiembre de 1951, el general Benjamín Menéndez encabezó un intento, notoriamente improvisado y fácilmente sofocado. Si bien se puso de manifiesto la firme posición legalista del grueso del Ejército, también constituyó un llamado de atención para un régimen que hasta entonces no había tropezado con oposición consistente alguna. Perón aprovechó la intentona - que calificó de “chirinada”- para establecer el estado de guerra interno y mantenerlo hasta 1955. Con ese instrumento se dedicó a depurar a los mandos militares de adversarios, sospechosos, tibios o vacilantes. A la vez, en plena campaña electoral, restringió aún más la acción de los políticos opositores y obtuvo un aplastante triunfo en noviembre de ese año, en las primeras elecciones con sufragio femenino: logró el 64% de los votos, la totalidad de los senadores y el 90% de los diputados, gracias a las ventajas del sistema de circunscripciones.

CONSOLIDACIÓN DEL AUTORITARISMO

Perón inició su segundo período visiblemente consolidado por el nuevo plan económico, que parecía tener éxito, la victoria sobre rebeldes militares y sindicalistas y el espectacular triunfo electoral. Incluso la muerte de Evita, sin duda un golpe muy duro para el

régimen, fue ocasión para unos funerales convertidos en singular manifestación plebiscitaria. El fin de la etapa revolucionaria -visible en la nueva política económica y en la normalización de las relaciones con Estados Unidos, y también simbolizado por el trágico acallamiento de la voz más dura del régimen- podía hacer presuponer una marcha hacia la pacificación política y una relación más normal con los que disientían, en el marco de un cierto pluralismo. Pero había otras fuerzas que empujaban al mantenimiento y acentuación del rumbo autoritario: el propio desenvolvimiento de la maquinaria puesta en marcha, que avanzaba inexorablemente sobre las zonas no controladas, y la poca predisposición para reconstruir los espacios democráticos por parte de muchos de los opositores, jugados a la eliminación del líder.

En los tres años finales de su gobierno, Perón tuvo una conducta errática. Fue evidente la dificultad para llenar el vacío dejado por la muerte de Eva Perón: tanto en la Fundación como en el nuevo Partido Peronista Femenino o en la misma CGT, se advirtió un manejo burocrático y una pérdida de iniciativa. Perón mismo pareció perderla, manifestó cierto cansancio y menor concentración en el trabajo y en la conducción política; pasó mucho más tiempo en la residencia de Olivos y se dedicó a exhibirse rodeado por las adolescentes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), instaladas en la misma residencia, o a encabezar desfiles juveniles en motoneta -la última novedad en sustitución de importaciones-, luciendo un llamativo gorrito de béisbol.

La UES era precisamente una de las nuevas manifestaciones de esa vía autoritaria, que procuraba encuadrar todos los sectores de la sociedad en organizaciones controladas y “peronizadas”. La máquina plebiscitaria, perfectamente organizada, producía regulares y previsibles convocatorias a la plaza. Se avanzó en la “peronización” de la administración pública y la educación, con la

exigencia de la afiliación al partido, la exhibición del “escudito” o el luto por la muerte de Eva Perón, la donación de sueldos para la fundación y todo tipo de manifestaciones celebratorias del líder y su esposa, cuyos nombres fueron impuestos a estaciones ferroviarias, hospitales, calles, plazas, ciudades y provincias. La “peronización” llegó a las Fuerzas Armadas: hubo cursos de adoctrinamiento justicialista, y las promociones y selección de jefes obedecieron desembozadamente a razones políticas. Los espacios de la oposición fueron reducidos al mínimo, en la prensa y en el Parlamento, donde el doctor Cámpora, presidente de la Cámara de Diputados, proclamó la superioridad de la obsecuencia sobre la consecuencia.

Mientras por esa vía el régimen marchaba hacia el totalitarismo, procuraba simultáneamente -aunque con menor consecuencia- reconstruir un espacio de convivencia con los opositores, empezando por un objetivo mínimo: el reconocimiento recíproco. Encontró alguna recepción en los partidos, para los que su situación en los bordes mismos de la ilegalidad generaba tensiones difíciles de soportar. Algunos de sus dirigentes se animaron a acercarse al gobierno y dialogar: la respuesta que encontraron fue tan cálida como dura la crítica de sus compañeros reluctantes. Primero fue, en 1951, una entrevista secreta del conservador Reynaldo Pastor. Luego, un ofrecimiento público de un grupo de dirigentes del Partido Comunista, encabezado por Juan José Real, que propuso integrarse a un Frente Popular Unido, pero chocó con el sólido anticomunismo peronista. Finalmente, a fines de 1952, fue un veterano dirigente socialista, Enrique Dickmann, quien negoció con Perón la liberación de presos políticos socialistas y la reapertura del periódico *La Vanguardia*, para ser de inmediato expulsado del partido. Con apoyo oficial, Dickmann fundó el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que recolectó disidentes varios de la izquierda, con el que Perón proyectó infructuosamente dividir al

socialismo.

Este tenue comienzo de una apertura -no declarada por ninguna de las dos partes- terminó bruscamente en abril de 1953: durante una concentración, y mientras hablaba Perón, estallaron en la Plaza de Mayo bombas colocadas por grupos opositores lanzados al terrorismo y murieron varias personas. La respuesta fue en la misma clave violenta: grupos peronistas incendiaron la Casa Radical, la Casa del Pueblo socialista y el Jockey Club, centro emblemático de la ambigua y ubicua “oligarquía”; la Policía, llamativamente pasiva, se volvió activa para impedir el incendio del diario *La Nación*. A esa explosión de terror administrativo siguió una amplia e indiscriminada detención de dirigentes y personalidades opositores, que incluía desde Ricardo Balbín hasta Victoria Ocampo. Pero en la segunda mitad del año, el régimen se ablandó y aceptó liberar a los presos siempre que los partidos lo pidieran y dieran así prueba de reconocimiento al régimen, conducta que, discretamente, siguieron los partidos menores. En diciembre, al final, una ley de amnistía permitió liberar a la mayoría. Al año siguiente, 1954, la convocatoria a elecciones para designar vicepresidente -Quijano había muerto apenas reelecto- llevó a montar de nuevo el escenario y la maquinaria electoral: el almirante Teisaire -que administraba el partido- derrotó con la tradicional amplitud a Crisólogo Larralde, uno de los más destacados dirigentes de la intransigencia radical.

Por entonces el radicalismo había definido su perfil, encontrando un ángulo de oposición posible a un régimen que giraba simultáneamente al conservadurismo y al autoritarismo. Al igual que los otros partidos, los radicales debían soportar, desde 1946, una dura división interna. Los unionistas, herederos del alvearismo y la Unión Democrática, estaban totalmente jugados a la abstención, la ruptura total y el golpe militar, y los sabattinistas de

Córdoba se habían plegado a esa línea. El grupo de Intransigencia y Renovación, en cambio, insistió desde el comienzo en la lucha institucional e ideológica, y siguió haciéndolo pese a la reducción casi total de los espacios. En 1954, ganó definitivamente el control del partido, cuando Arturo Frondizi alcanzó la presidencia del Comité Nacional. Acusado de “rojo” por sus enemigos internos, Frondizi había definido una imagen original de político intelectual, reforzada por la publicación de su libro *Petróleo y política*. Con él, había lanzado la propuesta de combatir al peronismo desde lo que éste tenía de más progresista, y sin renunciar a la crítica institucional, reivindicar la reforma agraria y el antiimperialismo, tema que los contratos petroleros habían tornado urticante.

Puede especularse sobre la sinceridad de esta propuesta y la posible emergencia de una clase política renovada. Pero ciertamente, en 1954 se ubicaba -como lo ha señalado Félix Luna- en el cuadro general de una cierta reapertura del debate público, que coincidía con un envejecimiento del régimen y de su líder. Por entonces, la revista *Esto Es* practicaba un periodismo abierto que se distinguió de la monótona apología de la prensa oficial; el periódico *De Frente*, de John William Cooke, pareció introducir en el peronismo un inesperado debate interno, que en ese movimiento verticalista no reconocía antecedente alguno; las revistas *Imago Mundi* y *Contorno* abrían una alternativa cultural y mostraban un renovado interés por la actualización del mundo intelectual. Ese año, la fundación del Partido Demócrata Cristiano parecía indicar - como ha dicho Tulio Halperin Donghi- que la Iglesia se sumaba a esta visión en cierto modo postuma del régimen envejecido.

LA CAIDA

La fundación del Partido Demócrata Cristiano marcó el comienzo

del conflicto entre Perón y la Iglesia, que rápidamente llevó a su caída. Pese a que había múltiples razones, no era un conflicto inevitable; dejarse llevar a él fue sin duda un grave error, y la señal de que ese hábil político -tan capaz de unificar el campo propio como de explotar las debilidades del adversario- había perdido muchas de sus capacidades.

La Comunidad Organizada -o, más modestamente, la peronización de las instituciones de la sociedad- era un proyecto con una dinámica propia, ejecutado por un conjunto de funcionarios, que ya marchaba de manera independiente de la voluntad o del arte para conducir del líder. El Ejército, al principio resguardado en su independencia y profesionalidad, había sucumbido en su camino, y las voces disconformes eran cada vez más fuertes. Pero la Iglesia, con la que al principio se había establecido un acuerdo mutuamente conveniente, era irreductible a él, y por eso potencialmente enemiga, máxime cuanto en la compleja institución tenían un lugar no despreciable viejos enemigos del régimen -identificados con la oposición- y nuevos disidentes, quejosos de distintos aspectos de la nueva política, como el abandono de las consignas nacionalistas. El Estado peronista y la Iglesia empezaron a chocar en una serie de campos específicos. La Iglesia era sensible a los avances de aquél en el terreno de la beneficencia, a través de la Fundación, y en el de la educación; aquí, al desagrado por el creciente culto laico del presidente de la Nación y su esposa, se agregaba la preocupación por los avances del Estado en la organización de los estudiantes secundarios, en un contexto de sombrías sospechas de corrupción. Al gobierno lo turbaba la conspicua intromisión de la Iglesia en la política, con la Democracia Cristiana, y la más solapada en el campo gremial que, desde el punto de vista del régimen, resultaba francamente subversiva.

El conflicto estalló en septiembre de 1954, cuando en Córdoba

compitieron dos manifestaciones celebratorias del Día del Estudiante, una organizada por los católicos y otra por la UES. En noviembre Perón lanzó su ataque contra la Iglesia; el enfrentamiento pareció enfriarse enseguida, pero se agudizó en diciembre, luego de la multitudinaria procesión en Buenos Aires en el día de la Inmaculada Concepción. El ataque mostró la verticalidad alcanzada en el aparato político oficial: todos a una, con escasas disidencias, descubrieron los tremendos vicios de la Iglesia. Aunque se intentó limitarlo a “unos pocos curas”, fue un ataque feroz, asombroso para una sociedad que desde 1930 había retrocedido tanto en su aprecio por los valores del laicismo. Se prohibieron las procesiones, se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas, se introdujo -en una ley en vías de aprobación referida a otra cuestión- una sorpresiva cláusula que permitía el divorcio vincular, se autorizó la reapertura de los prostíbulos y se envió un proyecto de reforma constitucional para separar a la Iglesia del Estado. Muchos sacerdotes fueron detenidos, y los periódicos se llenaron de denuncias públicas y comentarios groseros sobre la conducta y la moralidad de prelados y sacerdotes.

La defensa de la Iglesia no fue menos eficaz y demostró su poder como institución, en una sociedad que sin embargo no se caracterizaba por su devoción. Atacada por los medios de comunicación monopolizados por el gobierno, inundó la ciudad con todo tipo de panfletos, mientras sus asociaciones laicas, y en particular la Acción Católica, movilizaron sus cuadros, engrosados por los opositores, que encontraron finalmente la brecha en el régimen y no se sintieron inhibidos por la tonalidad clerical, nacionalista e integrista que predominaba en la acción eclesiástica. El 8 de junio, el día de Corpus, se celebró una multitudinaria procesión; el jefe de Policía -luego se demostró- hizo quemar una bandera argentina y acusó de ello a los opositores católicos. El 16 de

junio, se produjo un levantamiento de la Marina contra Perón.

Diffícilmente la génesis del levantamiento se encontrara en este conflicto, pues la Marina era la más laica y liberal de las tres fuerzas, pero los golpistas -oficiales y políticos opositores- encontraron aquí su ocasión. El proyecto de los marinos -en verdad descabellado- consistía en bombardear la Casa de Gobierno para asesinar a Perón; su ejecución, totalmente defectuosa, culminó en el bombardeo y ametrallamiento de una concentración de civiles reunida en la Plaza de Mayo para apoyar a Perón, que causó unas trescientas muertes. La intentona fracasó rápidamente y el Ejército demostró otra vez su fidelidad a las instituciones legales. Como en 1953, la primera reacción del régimen fue el terror administrativo: grupos visiblemente impunes incendiaron la Curia metropolitana y varias iglesias de la Capital.

También, como en ocasiones anteriores, esta explosión de furia fue seguida de una actitud conciliadora de Perón que, aunque triunfador, había perdido mucho de su libertad de maniobra, y en cierto modo era prisionero de sus salvadores militares. De modo súbito, concluyeron los ataques a la Iglesia, que molestaban profundamente a la mayoría de los jefes militares. Se ensayó una renovación de los cuadros dirigentes, excluyendo a los personajes más conflictivos y convocando a otros con mayor aptitud para el diálogo, y se llamó a la oposición a negociar. Perón declaró solemnemente que dejaba de ser el jefe de una revolución y pasaba a convertirse en el presidente de todos los argentinos. Los dirigentes opositores fueron invitados a abrir un debate público, utilizando los medios de prensa del Estado, incluyendo la cadena nacional de radiodifusión, a través de la cual pudo oírse a Arturo Frondizi invitar al gobierno a volver a la senda republicana y formular, con sobriedad, un verdadero programa de gobierno alternativo. Otros dirigentes pudieron hablar, pero al socialista Alfredo Palacios -que

reclamó la renuncia del presidente- no se lo autorizó. Por entonces, Perón había concluido que la posibilidad de abrir un espacio para la discusión democrática que lo incluyera era mínima. El 31 de agosto, luego de presentar retóricamente su renuncia, convocó -por última vez- a los peronistas a la Plaza de Mayo, denunció el fracaso de la conciliación y lanzó el más duro de sus ataques contra la oposición: por cada uno de los nuestros, afirmó, caerán cinco de ellos.

Fue el canto del cisne. Poco después, el 16 de septiembre, estalló en Córdoba una sublevación militar que encabezó el general Eduardo Lonardi, un prestigioso oficial, conspirador de 1951. Aunque los apoyos civiles fueron muchos, especialmente entre los grupos católicos, las unidades del Ejército que se plegaron fueron escasas. Pero entre las fuerzas “leales” había poca voluntad de combatir a los sublevados. A ellos se sumó la Marina en pleno, cuya flota amenazó con bombardear las ciudades costeras. Perón había perdido por completo la iniciativa y tampoco manifestó la voluntad de defenderse moviendo todos los recursos de que disponía; sus vacilaciones coincidieron con una decisión de quienes hasta ese momento habían sido sus sostenes en el Ejército, que con sobriedad decidieron aceptar una renuncia dudosamente presentada. El 20 de septiembre de 1955, Perón se refugió en la embajada de Paraguay y el 23 de septiembre el general Lonardi se presentó en Buenos Aires como presidente provisional de la Nación, ante una multitud tan numerosa como las reunidas por el régimen, pero sin duda distinta en su composición.